

22 de septiembre, Año del Libertador General San Martín, 1950

50ª REUNION — 44ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor **JUAN HORTENSIO QUIJANO**, vicepresidente de la Nación,  
y del contraalmirante (R.) **ALBERTO TEISAIRE**, presidente provisional  
del Honorable Senado

Secretarios: señores **ALBERTO H. REALES** y **SANTIAGO A. JOB**

SENADORES PRESENTES:

AMELOTTI, Osvaldo  
ANTILLE, Armando G.  
AVENDAÑO, Arcadio B.  
BASALDUA, Juan Carlos  
BAVIO, Ernesto F.  
CRUZ, Luis  
DURAND, Alberto  
ENDEIZA, Victor W.  
GIAVARINI, Alejandro Bautista  
GÓMEZ DEL JUNCO, Felipe  
GÓMEZ HENRIQUEZ, Samuel  
HERRERA, Ramón Esteban  
LORENZÓN, Ricardo Octavio  
LUCO, Francisco R.  
MADARIAGA, Eduardo  
MENDIONDO, F. Daniel  
RAMELLA, Pablo A.  
ROLDAN, Ramón Ángel  
SCATAMACCHIA, Mauricio Antonio  
TANCO, Miguel A.  
TEISAIRE, Alberto  
VIVIANI, Rinaldo  
ZERDA, Justiniano de la

AUSENTES, CON LICENCIA:

LAZARO, Juan Fernando de  
MOLINARI, Diego Luis

AUSENTES, CON AVISO:

MATHUS HOYOS, Alejandro  
SOLER, Lorenzo

SUSPENDIDO:

SANCHEZ RECALDE, Luis N. A.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

- I.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados.
- II.—Comunicación de la Presidencia del Honorable Senado.
- III.—Despachos de comisión.
- IV.—Peticiones particulares.

2.—Homenaje al ex diputado nacional doctor José Luis Moreno.

3.—Homenaje a los integrantes de la dotación del rastreador «Fournier» con motivo de cumplirse el primer aniversario de su desaparición.

4.—A moción del senador Scatamacchia se resuelve considerar el despacho de la Comisión de Justicia, en el proyecto de ley, en revisión, sobre organización de la justicia nacional.

5.—Consideración del asunto a que se refiere el número anterior. Se aprueba, modificado.

6.—Apéndice:

- I.—Sanción del Honorable Senado.
- II.—Comunicaciones al Poder Ejecutivo.

—En Buenos Aires, a los veintidós días del mes de septiembre del Año del Libertador General San Martín, 1950, siendo las 10 y 50, dice el

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

## 1

## ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente.** — Se va a dar lectura de los asuntos entrados.

## I

## Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados

En la sanción definitiva de los siguientes proyectos de ley que le fueran pasados en revisión:

Por el que se acuerda autorización para aceptar condecoraciones u honores otorgados por gobiernos extranjeros a los siguientes ciudadanos: Pedro Ramón Castro, Pedro Radio, José Joaquín Almagro, Juan Carlos Coarasa, Jorge Andrés Graig, Pablo Curatella Manes, Carlos Alberto Palacios, José Ricardo Bonafina, Atilio José Costa, Enrique A. Ferreira, Ricardo María Fernández Mira, Pascual Estanislao Cappano, Jorge Demóstenes Ramos, Franklin Lucero, Pedro Basilio Abadie Acuña, Miguel Ángel Espeche, Javier Teodoro Gallac, José F. Riefolo Bessone, Antonio P. Castro, Roberto Ares y Carlos V. Rodríguez Baigorria. (*A sus antecedentes.*)

—Acordando autorización para aceptar condecoraciones que le han sido otorgadas por gobiernos extranjeros al ciudadano Juan F. Castro. (*A sus antecedentes.*)

—Por el que se acuerda autorización para aceptar condecoraciones u honores otorgados por gobiernos extranjeros a los siguientes ciudadanos: Braulio Pérez, Raúl Antonio Enrico, Luis César Ramírez, Rafael Ocampo Giménez, Rogelio Normando Cornero, Joaquín I. Sauri, César Paradelo Malcolm, Juan E. A. Vacca y Arturo Mayorga. (*A sus antecedentes.*)

**Sr. Secretario (Reales).** — Han sido girados directamente a comisión, de acuerdo con el decreto del Honorable Senado de fecha 15 del corriente, el día 21, los siguientes proyectos de ley enviados por la Cámara de Diputados:

Proyecto de ley, en revisión, acordando permiso para aceptar honores conferidos por gobiernos extranjeros a los siguientes ciudadanos: Susana Casablanca, Mario Ernesto Ferrari, Lisandro Moyano, Guillermo M. Gallacher, Armando Aníbal Basail, Raúl Marcelino Perrone, Domingo A. Mercante y Argentino Castro. (*A la Comisión de Asuntos Constitucionales.*)

—Proyecto de ley, en revisión, acordando permiso para aceptar honores conferidos por gobiernos extranjeros a los siguientes ciudadanos: Víctor M. Fernández Bazán, José Carlos Vittone, R. E. Montes i Bradley, César Ojeda, José A. Sánchez Toranzo, Juan Carlos Walther, Daniel Franqui, José Adrián Negri, Osvaldo Raúl Lentino y Emilio Marcelino Heredia. (*A la Comisión de Asuntos Constitucionales.*)

—Proyecto de ley, en revisión, sobre modificación del artículo 4º de la ley 13.075 de reorganización de la Dirección General de Asistencia y Previsión para Ferrovianos. (*A la Comisión de Previsión Social.*)

—Proyecto de ley, en revisión, sobre creación de la Dirección General de Servicios Sociales para Bancarios. (*A la Comisión de Previsión Social.*)

## II

## Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado (1)

**Sr. Secretario (Reales).** — La Presidencia informa que, con fecha 21 del corriente, comunicó al Poder Ejecutivo la sanción definitiva de los siguientes proyectos de ley: 13.967, 13.968 y 13.969, por los que se autoriza a los ciudadanos Pedro Ramón Castro, Juan F. Castro, Braulio Pérez y otros, respectivamente, para aceptar condecoraciones u honores otorgados por gobiernos extranjeros.

## III

## Despachos de comisión

**Sr. Secretario (Reales).** — De acuerdo con el artículo 100 del reglamento del Honorable Senado, ha sido destinado directamente al orden del día el despacho de la Comisión de Justicia en el proyecto de ley, en revisión, sobre organización de la justicia nacional.

## ASUNTOS CONSTITUCIONALES:

En el proyecto de ley, en revisión, acordando permiso para aceptar honores conferidos por gobiernos extranjeros a los siguientes ciudadanos: Susana Casablanca, Mario Ernesto Ferrari, Lisandro Moyano, Guillermo M. Gallacher, Armando Aníbal Basail, Raúl Marcelino Perrone, Domingo A. Mercante y Argentino Castro. (*Al orden del día.*)

—En el proyecto de ley, en revisión, acordando permiso para aceptar honores conferidos por gobiernos extranjeros a los siguientes ciudadanos: Víctor M. Fernández Bazán, José Carlos Vittone, R. E. Montes i Bradley, César Ojeda, José A. Sánchez Toranzo, Juan Carlos Walther, Daniel Franqui, José Adrián Negri, Osvaldo Raúl Lentino y Emilio Marcelino Heredia. (*Al orden del día.*)

## INDUSTRIA Y COMERCIO:

En el proyecto de ley del señor senador Amelotti, creando el Instituto de Sericultura de la Nación. (*Al orden del día.*)

## IV

## Peticiónes particulares

Profesores de la Escuela Nacional de Comercio N° 3 de la Capital Federal gestionan el reconocimiento de servicios honorarios prestados en dicho establecimiento. (*A la Comisión de Previsión Social.*)

—Personal superior y de tropa de la policía de los territorios nacionales solicita la equiparación de sus sueldos con los de la Policía Federal. (*A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.*)

(1) Ver Apéndice de esta sesión, pág. 1448.

## 2

## HOMENAJE

**Sr. Giavarini.** — Pido la palabra.

Señor presidente: nuevamente la fatalidad ha producido un claro en las filas de la revolución nacional. Un hombre, que desde los albores del movimiento justicialista entregó sus mayores afanes y mejores esfuerzos a la causa que abrazó con pasión, ha rendido su vida, precisamente, en circunstancias en que desempeñaba el alto mandato legislativo que, en justo reconocimiento a sus virtudes, le había conferido el glorioso pueblo de Cuyo.

Ha muerto el diputado nacional José Luis Moreno. Bien podemos decir de su figura, como de los héroes que sacrifican su vida por las grandes causas de la humanidad: ha caído en cumplimiento de su deber. En ejercicio de la función y durante el transcurso de la sesión del día de ayer, la muerte arrebató sorpresivamente a un peronista de límpida ejecutoria, abriendo una herida honda y profunda en el corazón del pueblo que lo trajera a la banca parlamentaria, privando a la representación mendocina y a la Cámara de Diputados de la Nación de un eficaz, activo e inteligente miembro, y substrayendo al movimiento revolucionario un soldado leal y constructivo.

Había nacido en la provincia de San Luis en 1903. Cursó sus estudios de medicina en la ciudad de Córdoba, graduándose en 1920.

Fijó su residencia en Mendoza, donde fué elegido diputado provincial en 1938, y, posteriormente, en 1941, comisionado municipal de Guaymallén.

Se incorporó a las filas del general Perón desde el comienzo de su cruzada libertadora, y su acción entusiasta y eficiente lo llevó a ocupar una banca en la Convención Constituyente de la provincia de Mendoza, reunida en 1948.

Su inteligencia, su bondad, sus nobles sentimientos de solidaridad y humanidad le granjearon la simpatía y admiración de su pueblo y amigos y el respeto de sus adversarios.

En 1946 fué elegido diputado al Honorable Congreso de la Nación, donde su constante actividad, su inteligencia y constructiva labor y su acendrada convicción peronista le conquistaron un lugar destacado.

Interesantes proyectos jalonan su breve pero fecundo paso por la Cámara baja. Entre los muchos que puso a consideración de sus pares figuran los referentes al régimen universitario, a la creación de la Facultad de Ciencias Odontológicas, a la formación de la Ciudad Universitaria San Martín para los estudiantes de la Universidad de Cuyo, al Código Sanitario y de Asistencia Social, a la indemnización de las víctimas de errores judiciales, al estatuto del docente, y tantos otros que nos hablan bien a las

claras de su perseverante afán por el bienestar de sus conciudadanos.

Miembro permanente de la Comisión del Aborigen, en el cargo de secretario de la misma trabajó en la búsqueda de soluciones para los problemas de esa estirpe que se va. Fué miembro de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Extranjeros y de Culto y de la Bicameral encargada del estudio y redacción de un proyecto de modificaciones a la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En 1946 representó a la Cámara de Diputados de la Nación en el acto de transmisión del mando presidencial en Chile.

En homenaje a la memoria del leal peronista y destacado parlamentario que hoy nos deja, solicito al señor presidente quiera invitar al honorable cuerpo a ponerse de pie.

**Sr. Presidente.** — Invito a los señores senadores y público asistente a ponerse de pie en homenaje a la memoria del diputado nacional doctor José Luis Moreno.

—Se ponen de pie los señores senadores y público asistente a las galerías.

## 3

## HOMENAJE

**Sr. Scatamacchia.** — Pido la palabra.

Señor presidente: hoy hace un año que el país entero siguió con conmovida atención los detalles de la búsqueda de un buque de guerra argentino, desde el cual se había silenciado la voz invisible que a través del éter lo comunicaba con la patria. Para todos los que hemos tenido la inquietud de conocer nuestro país, no es un secreto la dificultad que experimentan los marinos, que deben patrullar o simplemente navegar por la inmensa red de canales fueguinos, cuyas características hacen esencialmente peligrosa la navegación en cualquier época, y especialmente durante el período invernal.

La Nación vivió entonces la angustia colectiva, compartiendo la enorme ansiedad de los familiares de los tripulantes del rastreador «Fournier», y nadie se resignaba a pensar que en el cumplimiento de una misión civilizadora docenas de marinos argentinos habían de encontrar la muerte. Cuando no pudo dudarse de la consumación de la tragedia, esa angustia se tradujo en conmovedores homenajes, que trasuntaban el dolor de todos los argentinos ante ese golpe que sufría nuestra gloriosa marina de guerra, cuya honrosa tradición la ha colocado bien adentro del afecto nacional.

Los escasos despojos hallados, la carencia absoluta de datos, no han permitido reconstruir sino muy aproximadamente el hecho luctuoso; pero ello no obstante, en nuestro espíritu subsistió y subsiste cada vez que lo recordamos, ese

dolor íntimo que se experimenta ante lo irreparable, cuando el golpe afecta a sentimientos profundamente arraigados en el corazón.

Al cumplirse el primer aniversario de aquella tragedia, he querido decir estas breves palabras en representación de todos los señores senadores que integran el bloque único, para rendir nuestro homenaje a la memoria de los marinos desaparecidos mientras cumplían con su deber, sumando así la voz de este cuerpo al conjunto de las que hoy, en todos los ámbitos de nuestra patria, han de elevarse al cielo para rogar por el eterno descanso de sus almas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!, en las bancas.*)

**Sr. Presidente.** — Se va a pasar al orden del día.

4

### MOCION

**Sr. Scatamacchia.** — Pido la palabra.

Hago moción para que en la sesión de hoy se trate el orden del día número 83.

—Apoyado.

**Sr. Presidente.** — En consideración la moción formulada por el señor senador por Buenos Aires.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

5

### ORGANIZACION DE LA JUSTICIA NACIONAL

—Se lee:

#### Despacho de comisión

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Justicia ha considerado el proyecto de ley sobre organización de la Justicia Nacional, venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su sanción con las siguientes modificaciones:

**Artículo 12.** — Se agrega, después de la palabra «abogado», lo siguiente: «o escribano graduados en universidad nacional».

**Artículo 17.** — Se agrega, después del primer párrafo, lo siguiente: «Cuando las cámaras nacionales de apelaciones o los jueces impongan sanciones disciplinarias al personal bajo su dependencia, las pondrán de inmediato en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.»

**Artículo 20.** — Se suprime la última parte, que dice: «Lo mismo cuando un oficial ejecutor presente una orden escrita de un juez nacional para efectuar un embargo, secuestro o prisión dentro de su jurisdicción, las autoridades provinciales

y personas particulares estarán obligadas a prestar el auxilio que él les requiera para el cumplimiento de su comisión.»

**Artículo 41.** — Se substituye en el inciso a) la palabra «atribuida» por «atribuido».

**Artículo 46.** — Se suprime el último párrafo, que dice: «La Corte Suprema podrá disponer la distribución por especialidades de las causas de competencia de los jueces nacionales de primera instancia en lo civil y en lo comercial de la Capital Federal, según las necesidades de la administración de justicia y sin que esta medida pueda privar a los jueces del conocimiento de los asuntos pendientes.»

**Artículo 61.** — Se agrega, después de la frase «los cuerpos técnicos tendrán su asiento en la Capital Federal», lo siguiente: «y en la sede de las cámaras nacionales de apelaciones».

**Artículo 63.** — Se agrega, después de las palabras «los cuerpos técnicos», las siguientes: «de la Capital Federal».

**Artículo 78.** — Se suprimen las palabras «escribano nacional o de» y se agrega, al final, la siguiente frase: «Los jueces letrados de los territorios nacionales nombrados conforme con las disposiciones de la ley 3.575, gozarán de la inamovilidad prescrita en el artículo 3º de esta ley a partir del próximo acuerdo que preste el Honorable Senado.»

**Artículo 82.** — Se suprime.

De acuerdo con el artículo 100 del reglamento del Honorable Senado, la comisión ha resuelto pasar este despacho directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 21 de septiembre del Año del Libertador General San Martín, 1950.

*Juan Carlos Basaldúa. — Eduardo Madariaga. — Armando G. Antille. — Felipe Gómez del Junco.*

#### Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(Septiembre 15 de 1950)

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

#### Poder Judicial

**Artículo 1º** — El Poder Judicial de la Nación será ejercido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales nacionales de la Capital Federal y los tribunales nacionales con asiento en las provincias y territorios.

#### Magistratura nacional

**Art. 2º** — Los jueces de la Nación son nombrados por el presidente de la Nación con acuer-

do del Senado, y durante el receso del Congreso, en comisión hasta la próxima legislatura. Recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permanezcan en sus funciones. La compensación será uniforme para todos los jueces de una misma instancia, cualquiera fuera el lugar donde desempeñen sus funciones. Este principio se aplicará igualmente a la retribución de todos los funcionarios y empleados de la justicia nacional.

Art. 39 — Los jueces de la Nación son inamovibles y conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Sólo pueden ser juzgados y removidos, los de la Corte Suprema de Justicia, por juicio político ante el Senado de la Nación, y los inferiores, por un tribunal judicial en la forma que establece la ley.

Art. 49 — Para ser juez de la Corte Suprema de Justicia y procurador general de la Nación, se requiere ser argentino nativo, abogado graduado en universidad nacional, con diez años de ejercicio y treinta años de edad.

Art. 59 — Para ser juez de una cámara nacional de apelaciones se requiere ser argentino nativo, abogado graduado en universidad nacional, con seis años de ejercicio y treinta años de edad.

Art. 69 — Para ser juez nacional de primera instancia, se requiere ser argentino nativo, abogado graduado en universidad nacional, con cuatro años de ejercicio y veinticinco años de edad.

Art. 79 — Antes de asumir el cargo, los jueces prestarán juramento de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente y de conformidad con lo que prescribe la Constitución de la Nación.

Art. 89 — No podrán ser simultáneamente jueces del mismo tribunal colegiado, parientes o afines dentro del cuarto grado civil. En caso de afinidad sobreviniente, el que la causare abandonará el cargo.

Art. 99 — Es incompatible la magistratura judicial, con toda actividad de proselitismo político, con el ejercicio del comercio y la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge y los hijos, y con el desempeño de empleos públicos o privados; excepto la comisión de estudios o la docencia. No estará permitido, sin embargo, el desempeño de la docencia primaria o secundaria. A los jueces de la Nación les está prohibido practicar juegos de azar o concurrir habitualmente a lugares destinados a ellos o ejecutar actos que comprometan la dignidad del cargo.

Art. 10. — Los jueces residirán en la ciudad en que ejerzan sus funciones o en un radio hasta de cuarenta kilómetros de la misma. Para residir a mayor distancia, deberán recabar autorización de la Corte Suprema.

Art. 11. — Los jueces de primera instancia concurrirán a su despacho todos los días hábiles durante las horas que funcione el tribunal. Los jueces de la Corte Suprema y cámaras nacionales de apelaciones, lo harán los días y horas que el respectivo tribunal fije para los acuerdos y audiencias.

### *Funcionarios y empleados*

Art. 12. — Sin perjuicio de los requisitos que por reglamento establezca la Corte Suprema, para ser secretario o prosecretario de los tribunales nacionales, se requiere: ser argentino, mayor de edad y abogado graduado en universidad nacional. No podrá designarse secretario o prosecretario al pariente del juez dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Art. 13. — Para ser designado funcionario o empleado en la justicia nacional cuando la ley no exija además otras condiciones especiales, se requiere ser argentino y se dará preferencia a quienes acrediten haber terminado estudios secundarios, salvo que se trate del personal de maestranza y servicio.

Art. 14. — La Corte Suprema de Justicia nombra, remueve y decide sobre toda cuestión vinculada al personal de la justicia de la Nación cuya designación no dependa del Poder Ejecutivo, conforme a las normas de esta ley y a las que aquélla establezca en sus reglamentos.

Art. 15. — Los funcionarios y empleados de la justicia de la Nación, no podrán ser removidos sino por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con audiencia del interesado.

Art. 16. — Los funcionarios y empleados tendrán los derechos, deberes, responsabilidades e incompatibilidades que la ley o los reglamentos establezcan. La Corte Suprema acordará un escalafón que asegure la estabilidad y el ascenso en la carrera, atendiendo ante todo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados debidamente calificada y a su antigüedad.

### *Sanciones disciplinarias*

Art. 17. — Las faltas de los funcionarios, empleados y demás auxiliares de la justicia de la Nación, podrán ser sancionados con prevención, apercibimiento, multa hasta quinientos pesos, suspensión no mayor de treinta días, cesantía y exoneración, conforme a lo establecido por esta ley y los reglamentos.

En análogas circunstancias los jueces serán pasibles de las tres primeras sanciones mencionadas precedentemente, sin perjuicio de las que dispone la ley sobre enjuiciamiento y remoción.

Art. 18. — Los tribunales colegiados y jueces podrán imponer arresto personal hasta de quince días u otras sanciones disciplinarias a los abogados, procuradores, litigantes y otras per-

sonas, por faltas que cometieren contra su dignidad o decoro en las audiencias o escritos o contra su autoridad u obstruyendo el curso de la justicia. El arresto será cumplido en una dependencia del propio tribunal o juzgado o en el domicilio del afectado.

Art. 19. — Las sanciones aplicadas por la Corte Suprema de Justicia o las cámaras nacionales de apelaciones, sólo serán susceptibles de un reclamo de reconsideración ante el mismo tribunal. Las sanciones dispuestas por los jueces nacionales de primera instancia podrán ser apeladas, en efecto suspensivo dentro del tercer día.

#### *Auxilio debido a la justicia nacional*

Art. 20. — Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo nacional, prestarán de inmediato todo el auxilio que les sea requerido por los jueces nacionales dentro de su jurisdicción, para el cumplimiento de sus resoluciones, y siempre que un juez nacional dirija un despacho a un juez provincial, para practicar actos judiciales será cumplido el encargo. Lo mismo cuando un oficial ejecutor presente una orden escrita de un juez nacional para efectuar un embargo, secuestro o prisión dentro de su jurisdicción, las autoridades provinciales y personas particulares estarán obligadas a prestar el auxilio que él les requiera para el cumplimiento de su comisión.

#### *Corte Suprema de Justicia*

Art. 21. — La Corte Suprema de Justicia estará compuesta por cinco jueces y un procurador general. Tendrá su asiento en la Capital Federal y designará su presidente. Dictará su reglamento interno y económico y ejercerá superintendencia sobre todos los tribunales de la Nación, en la forma que se establezca en sus reglamentos.

Art. 22. — Cuando por impedimento de sus miembros haya que integrar el tribunal, se hará por sorteo con los jueces que desempeñen la presidencia de las cámaras nacionales de apelaciones, o con sus substitutes legales, debiendo reunir el juez llamado a integrarla, las condiciones exigidas para ser miembro de la Corte.

Art. 23. — Las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que la integran, siempre que éstos concordaren en la solución del caso. Si hubiere desacuerdo se requerirán los votos necesarios para obtener mayoría absoluta de opiniones.

Art. 24. — La Corte Suprema de Justicia conocerá:

una provincia o sus vecinos con un Estado extranjero; en las causas concernientes a embajadores, ministros plenipotenciarios o cónsules extranjeros, y en las causas entre la Nación y una o más provincias o de éstas entre sí. En estos supuestos, la Corte Suprema no procederá de oficio y sólo ejercerá jurisdicción en los casos contenciosos en que sea requerida a instancia de parte.

No se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero, sin requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio.

A los efectos pertinentes de la primera parte de este inciso, se considerarán vecinos:

- a) Las personas físicas domiciliadas en el país desde dos o más años antes de la iniciación de la demanda, cualquiera fuese su nacionalidad;
- b) Las personas jurídicas de derecho público del país;
- c) Las demás personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país;
- d) Las sociedades y asociaciones sin personería jurídica, cuando la totalidad de sus miembros se halle en la situación prevista en el apartado a).

Son causas concernientes a embajadores o ministros plenipotenciarios extranjeros, las que les afecten directamente por debatirse en ellas derechos que les asisten o porque comprometen su responsabilidad, así como las que en la misma forma afecten a las personas de su familia, o al personal de la embajada o legación que tenga carácter diplomático.

No se dará curso a las acciones contra las personas mencionadas en el punto anterior, sin requerirse previamente del respectivo embajador o ministro plenipotenciario, la conformidad de su gobierno para someterlas a juicio.

Son causas concernientes a los cónsules extranjeros las seguidas por hechos o actos cumplidos en el ejercicio de sus funciones propias, siempre que en ellas se cuestione su responsabilidad civil o criminal.

19 Originaria y exclusivamente en las causas que se susciten entre la Nación o

20 Por recurso extraordinario, en los casos del artículo 14 de la ley 48, y 69 de la ley 4.055.

- 3º Por recurso de casación y de revisión de la jurisprudencia en la forma que la ley determina.
- 4º En los recursos de revisión referidos por los artículos 2º y 4º de la ley 4.055, y en el de aclaratoria de sus propias resoluciones.
- 5º En los recursos directos por apelación denegada.
- 6º En los recursos de queja por retardo de justicia en contra de las cámaras nacionales de apelaciones.
- 7º Por apelación ordinaria, de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones, en los siguientes casos:
- a) Causas en que la Nación directamente sea parte, cuando el valor disputado en último término, sin sus accesorios, sea superior a cincuenta mil pesos;
  - b) Extradición de criminales reclamados por países extranjeros;
  - c) Causas a que dieren lugar los apremios o embargos marítimos en tiempo de guerra, sobre salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles;
  - d) Causas criminales por delitos contra la seguridad del Estado, de la Nación, o contra los poderes públicos y el orden constitucional, cuando la pena aplicable exceda de seis años de prisión o reclusión;
  - e) De las suscitadas entre una provincia y los vecinos de otra.
- 8º De las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlo. Decidirá asimismo sobre el juez competente en los casos en que su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia.

#### *Cámaras nacionales de apelaciones*

Art. 25. — Las cámaras nacionales de apelaciones podrán dividirse en salas de tres miembros cuando estén integradas por número suficiente de jueces.

Art. 26. — Las cámaras nacionales de apelaciones, designarán anualmente un presidente y uno o más vicepresidentes, que se distribuirán sus funciones en la forma que lo determinen las reglamentaciones que se dicten.

Art. 27. — Las decisiones de las cámaras nacionales de apelaciones o de sus salas, se adop-

tarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que las integran, siempre que éstos concordaren en la solución del caso. Si hubiere desacuerdo se requerirán los votos necesarios para obtener mayoría de opiniones.

Si se trataren de sentencias definitivas de unas u otras en procesos ordinarios, se dictarán por deliberación y voto de los jueces que las subscriben, previo sorteo de estudio. En las demás causas, las sentencias podrán ser redactadas en forma impersonal.

Art. 28. — Las cámaras nacionales de apelaciones, se reunirán en tribunal pleno: a) para reglamentar su labor o la distribución de la labor entre sus salas, si las hubiere, y entre los juzgados de primera instancia, que dependan de ella, resolviendo las cuestiones que se susciten al respecto; b) para unificar la jurisprudencia de las salas o evitar sentencias contradictorias, cuando no exista interpretación de la Corte Suprema. La doctrina legal o interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria es de aplicación obligatoria para la misma Cámara y para los jueces de primera instancia, respecto de los cuales la cámara que la pronuncie es tribunal de alzada, sin perjuicio de que los jueces de primera instancia o de cámara, dejen a salvo su opinión personal. Sólo podrá volverse sobre ella, como consecuencia de una nueva sentencia plenaria.

Art. 29. — Las diligencias procesales se cumplirán ante la cámara o en su caso ante la sala que conozca cada juicio.

Art. 30. — Contra las sentencias de las cámaras nacionales de apelaciones o de sus salas, no habrá otro recurso de alzada que los que autoricen las leyes para ante la Corte Suprema.

Art. 31. — Las cámaras nacionales de apelaciones o sus salas se integrarán por sorteo entre los demás miembros de aquéllas; luego, del mismo modo, con los jueces de las otras cámaras nacionales de apelaciones, en el orden que establezca la reglamentación, y por último, siempre por sorteo, con los jueces de primera instancia que dependan de la cámara o sala que deba integrarse.

#### *Tribunales nacionales de la Capital Federal*

Art. 32. — Los tribunales nacionales de la Capital Federal, estarán integrados por:

1º Cámaras nacionales de apelaciones de la Capital Federal:

- a) En lo civil, comercial y penal especial y en lo contencioso-administrativo;
- b) En lo civil;
- c) En lo comercial;

- d) En lo penal;
- e) Del trabajo;
- f) De paz.

**2º Jueces nacionales de primera instancia de la Capital Federal:**

- a) En lo civil y comercial especial, en lo penal especial y en lo contenciosoadministrativo;
- b) En lo civil;
- c) En lo comercial;
- d) En lo penal: de sentencia, de instrucción y correccional;
- e) Del trabajo;
- f) De paz.

***Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contenciosoadministrativo de la Capital Federal***

Art. 33. — La Cámara Federal de Apelaciones de la Capital, existente a la fecha de sanción de esta ley, se designará: «Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contenciosoadministrativo» y será tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia en lo civil, y comercial especial, en lo penal especial y en lo contenciosoadministrativo.

Conocerá asimismo, de los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de organismos administrativos, en los casos autorizados por las leyes y contra las resoluciones del jefe de la Policía Federal, en materia de derecho de reunión.

Art. 34. — Actuará dividida en tres salas, por especialidades dentro de su competencia, según las disposiciones que adopte la misma Cámara, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.

***Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal***

Art. 35. — Las dos Cámaras de Apelaciones en lo Civil de la Capital, existentes a la fecha de sanción de esta ley, constituirán un solo tribunal que se denominará: «Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, de la Capital Federal». Será tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia en lo civil de la Capital Federal.

***Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal***

Art. 36. — La Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital, existente a la fecha de sanción de esta ley se denominará: «Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, de la Capital Federal». Será tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia en lo comercial de la Capital Federal.

***Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal de la Capital Federal***

Art. 37. — La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital, existente a la fecha de la sanción de esta ley, se denominará: «Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal, de la Capital Federal».

Conocerá como tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia en lo penal de la Capital Federal.

Art. 38. — Créase bajo la dependencia de la cámara, la Oficina de Servicio Auxiliar, con los empleados que fija la ley. Dichos empleados deberán ser puestos de modo temporario a disposición de los jueces de instrucción y en lo penal especial, con el solo objeto de lograr una más pronta substanciación de las causas que por su naturaleza o complejidad no puedan atenderse eficazmente con el personal de los juzgados.

***Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal***

Art. 39. — La actual Cámara de Apelaciones de la Justicia del Trabajo, de la Capital, se denominará: «Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de la Capital Federal». Se compondrá de doce miembros y será tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales de primera instancia del trabajo, de la Capital Federal.

***Cámara Nacional de Apelaciones de Paz, de la Capital Federal***

Art. 40. — La actual Cámara de Apelaciones de la Justicia de Paz, de la Capital, se denominará: «Cámara Nacional de Apelaciones de Paz, de la Capital Federal». Será tribunal de alzada, respecto de los jueces nacionales de primera instancia de paz, de la Capital Federal.

***Jueces Nacionales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Especial, de la Capital Federal***

Art. 41. — Los juzgados federales números 5 y 6, de la Capital Federal, que existen a la fecha de la sanción de esta ley, se denominarán: «Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Especial», conservando su actual competencia, pero no conocerán:

- a) De las causas cuyo conocimiento les está atribuida por razones de la nacionalidad o el domicilio de las personas;
- b) De las causas que se atribuye por esta ley a los jueces nacionales de primera instancia en lo contenciosoadministrativo, de la Capital Federal;
- c) De las causas a que se refiere el artículo 46 de esta ley.



Art. 42. — Conocerán además de las causas que versen sobre hechos, actos y contratos:

- a) Concernientes a los medios de transportes terrestres, con excepción de las acciones civiles por reparación de los daños y perjuicios causados por delitos y cuasi delitos;
- b) Regidos por el derecho de la navegación y el derecho aeronáutico.

*Jueces Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Especial, de la Capital Federal*

Art. 43. — Los juzgados federales en lo criminal y correccional, de la Capital, números 1 y 2, que existen a la fecha de la sanción de esta ley, se denominarán: «Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Especial, de la Capital Federal», conservando su actual competencia, pero no conocerán de las causas cuyo conocimiento les está atribuido por razón del lugar, o las que se les hayan atribuido por disposición expresa de esta ley a otro tribunal.

Art. 44. — Cuando un delito o un concurso de delitos atribuido a una o más personas como autores, cómplices o encubridores, diera lugar a la instrucción de un solo proceso, y uno o varios de los hechos o personas cayera bajo la competencia de los jueces nacionales de primera instancia en lo penal especial de la Capital Federal, dicho proceso será totalmente substanciado y terminado en el tribunal de esta competencia.

*Jueces Nacionales de Primera Instancia en lo Contenciosoadministrativo, de la Capital Federal*

Art. 45. — Los juzgados federales números 3 y 4, de la Capital Federal, creados por la ley de presupuesto del año 1948, a que se refiere el artículo 6º de la ley 13.278, y los juzgados creados, para la Capital Federal, por la ley 12.833, se denominarán: «Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contenciosoadministrativo, de la Capital Federal».

Serán competentes para conocer:

- a) De las causas contenciosoadministrativas;
- b) De las causas que versen sobre contribuciones nacionales y sus infracciones;
- c) De las causas cuyo conocimiento está atribuido a los jueces creados, para la Capital Federal, por la ley 12.833;
- d) De los recursos contra las resoluciones administrativas, que las leyes en vigor atribuyen a los jueces federales existentes a la fecha de la sanción de esta ley.

*Jueces Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, en lo Comercial y Penal: de Sentencia, de Instrucción y Correccional*

Art. 46. — Los actuales juzgados en lo Civil, en lo Comercial, de Sentencia, de Instrucción

y Correccional de la Capital, se denominarán, respectivamente: «Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil de la Capital Federal, Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal y Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal de la Capital Federal: de Sentencia, de Instrucción y Correccional».

Tendrán la misma competencia actual, con las modificaciones que resultan de la presente ley.

La Corte Suprema podrá disponer la distribución por especialidades de las causas de competencia de los Jueces Nacionales de Primera Instancia en lo Civil y en lo Comercial de la Capital Federal, según las necesidades de la administración de justicia y sin que esta medida pueda privar a los jueces del conocimiento de los asuntos pendientes.

*Jueces nacionales de primera instancia del trabajo de la Capital Federal*

Art. 47. — Los juzgados nacionales de primera instancia del trabajo, de la Capital Federal, tendrán la competencia que les atribuye la ley 12.948, aun en las causas en que sea parte la Nación, sus reparticiones autárquicas o la municipalidad.

Créanse diez nuevos juzgados nacionales de primera instancia del trabajo, en la Capital Federal, con el mismo personal asignado a los que funcionan actualmente.

*Jueces nacionales de paz de la Capital Federal*

Art. 48. — Con excepción de las causas mencionadas en los artículos 41, 42, 45 y 47, los juzgados de paz de primera instancia de la Capital conocerán:

1º

- a) De los asuntos civiles y comerciales en que el valor cuestionado no exceda de diez mil pesos moneda nacional;
- b) De los juicios sucesorios cuyo haber hereditario no exceda prima facie de treinta mil pesos moneda nacional;
- c) De los concursos civiles cuyo pasivo no sobrepase la suma de veinte mil pesos moneda nacional;
- d) De las pequeñas quiebras a las que se refiere el título XXIII de la ley 11.719. Se considera pequeña quiebra, la quiebra cuyo pasivo no exceda de veinte mil pesos moneda nacional.

La competencia de los juzgados mencionados subsistirá en los juicios sucesorios aun cuando hubiese

contestación sobre el carácter de herederos de las personas que se presenten como tales, y aun cuando el haber hereditario exceda en definitiva hasta en un cincuenta por ciento de la suma fijada en el apartado b);

- e) Quedan exceptuados de la competencia de los juzgados de paz, los interdictos y las venias, así como también los asuntos que se refieran al derecho de familia, con excepción de la hipótesis especificada en el apartado b).

2º De las demandas contra los juicios universales enumerados en el inciso anterior, cualquiera sea su importancia;

3º De las informaciones sumarias que se refieran a los juicios de competencia del tribunal;

4º De las demandas por desalojo, rescisión, cumplimiento, cobro de alquileres y demás cuestiones vinculadas al contrato de locación, cualquiera sea su importancia, haya o no contrato escrito;

5º De las demandas reconventionales, cualquiera sea su monto.

#### *Oficina de Mandamientos y Notificaciones para la justicia de la Capital Federal*

Art. 49. — La actual oficina organizada por decreto del Poder Ejecutivo 25.559 de 1948, tendrá a su cargo la diligencia de los mandamientos y notificaciones que expidan las cámaras nacionales de apelaciones y juzgados nacionales de primera instancia de la Capital Federal.

La Corte Suprema podrá encomendar a la misma oficina iguales diligencias del tribunal.

Art. 50. — Quedan incorporados a dicha oficina los oficiales de justicia de los actuales juzgados federales en lo civil y comercial.

Art. 51. — La Corte Suprema ejerce superintendencia sobre la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, debiendo reglamentar su organización y funcionamiento.

#### *Tribunales nacionales con asiento en las provincias y territorios*

Art. 52. — Los tribunales nacionales con asiento en las provincias y territorios estarán integrados por:

1º Por las cámaras nacionales de apelaciones con asiento en las ciudades de La Plata, Bahía Blanca, Paraná, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Resistencia y Comodoro Rivadavia;

2º Por jueces nacionales de primera instancia con asiento en las ciudades de La Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Mercedes, Azul, Rosario, Santa Fe, Cór-

doba, Río Cuarto, Bell Ville, Paraná, Concepción del Uruguay, Corrientes, Paso de los Libres, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Mendoza, San Rafael, San Juan, Catamarca, La Rioja; y en los territorios de Río Negro, Neuquén, Chaco, Misiones, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia y Gobernación Marítima de Tierra del Fuego;

3º Por los jueces nacionales de paz de los territorios nacionales.

#### *Cámaras nacionales de apelaciones de provincias y territorios*

Art. 53. — Las actuales cámaras federales de La Plata, Bahía Blanca, Paraná, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, se denominarán: cámaras nacionales de apelaciones de La Plata, Bahía Blanca, Paraná, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, respectivamente, y serán competentes para conocer de la causas que les están asignadas hasta el presente, con las siguientes modificaciones:

a) La Cámara Nacional de Apelaciones de La Plata se compondrá de siete miembros y será tribunal de alzada respecto de los juzgados nacionales de primera instancia de La Plata, San Nicolás, Mercedes, Azul, y territorio de La Pampa;

b) La Cámara Nacional de Apelaciones de Bahía Blanca será tribunal de alzada respecto de los juzgados nacionales de primera instancia de Bahía Blanca, y territorios de Río Negro y Neuquén;

c) La Cámara Nacional de Apelaciones de Paraná, será tribunal de alzada respecto de los juzgados nacionales de primera instancia de Paraná, Corrientes, Paso de los Libres, Concepción del Uruguay, y territorio de Misiones.

Art. 54. — Las actuales cámaras de apelaciones de los territorios del Norte y del Sur, se denominarán: Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia y de Comodoro Rivadavia, respectivamente, y serán competentes para conocer de las causas que les están asignadas hasta el presente, con las siguientes modificaciones:

a) La Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia será tribunal de alzada respecto de los juzgados nacionales de primera instancia en los territorios del Chaco y Formosa;

b) La Cámara Nacional de Apelaciones de Comodoro Rivadavia será tribunal de alzada respecto de los juzgados nacionales de primera instancia en los terri-

torios de Chubut, Santa Cruz, y de las gobernaciones militar de Comodoro Rivadavia y marítima de Tierra del Fuego.

*Jueces nacionales de primera instancia de provincias y territorios*

Art. 55. — Los actuales jueces federales con asiento en las provincias se denominarán jueces nacionales de primera instancia, conservando su actual competencia; pero conocerán además:

- a) De las causas civiles entre la provincia en que tuvieren su asiento y algún vecino o vecinos de otra o de la Capital Federal. Cuando hubiere más de un juez nacional de primera instancia en la provincia, conocerá de estas causas, el que tenga su asiento en la Capital;
- b) De los hechos, actos y contratos concernientes a los medios de transporte terrestre, con excepción de las acciones civiles por reparación de daños y perjuicios causados por delitos o cuasi delitos; y a los regidos por el derecho de la navegación y por el derecho aeronáutico;
- c) De las causas que versen sobre negocios particulares de los cónsules extranjeros y de todas las concernientes a los vicecónsules extranjeros;
- d) De los recursos de hábeas corpus, cuando la amenaza, restricción o privación de la libertad provenga de una autoridad nacional o afecte a una persona integrante o dependiente de una autoridad nacional.

Art. 56. — Los actuales jueces letrados de los territorios nacionales, se denominarán: jueces nacionales de primera instancia y conservarán su actual organización y competencia, quedando suprimidas las consultas a que se refiere el artículo 17, inciso 4 de la ley 4.055. Conocerán igualmente de las causas atribuidas hasta ahora a los jueces creados por la ley 12.833.

Art. 57. — Los juzgados creados por la ley 12.833, se convierten y se designarán juzgados nacionales de primera instancia conservando los de Santa Cruz, Neuquén, Santa Rosa, Resistencia, Formosa y Misiones, su asiento actual. Tendrán la misma competencia que los juzgados nacionales de primera instancia, a que se refiere el artículo anterior.

El de Rawson, tendrá su asiento en la gobernación militar de Comodoro Rivadavia y el de Viedma, en Fuerte General Roca.

Créase un juzgado nacional de primera instancia, con asiento en la gobernación marítima de Tierra del Fuego, con jurisdicción en ella, en

las islas Malvinas y en la zona Antártida Argentina, con la misma competencia de los jueces a que se refiere el artículo anterior.

Art. 58. — Los actuales jueces de paz de los territorios, se designarán jueces nacionales de paz de los territorios.

Para ser juez nacional de paz de territorios, se requiere: ser argentino, saber leer y escribir, tener veinticinco años de edad y antecedentes honorables.

Los designa el Poder Ejecutivo a propuesta del gobernador del respectivo territorio y conservarán su cargo mientras dure su idoneidad y buena conducta. Sólo serán removidos por resolución de la cámara nacional de apelaciones respectiva, previo sumario y audiencia del interesado.

*Cuerpos técnicos periciales y peritos auxiliares de la justicia nacional*

Art. 59. — Como auxiliares de la justicia nacional, y bajo la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, funcionarán:

- a) Cuerpos técnicos periciales: de médicos forenses, de contadores y de calígrafos;
- b) Peritos ingenieros, tasadores, traductores e intérpretes.

Art. 60. — Los integrantes de los cuerpos técnicos, los peritos y sus respectivos empleados, serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo de conformidad con lo que establece el decreto ley 33.827 del año 1944.

Art. 61. — Los cuerpos técnicos tendrán su asiento en la Capital Federal y se integrarán con los funcionarios de la respectiva especialidad que la ley de presupuesto asigne a los tribunales nacionales de la Capital Federal y de las provincias y territorios nacionales. Los peritos serán también los que la ley de presupuesto asigne a los tribunales nacionales de la Capital Federal y de las provincias y territorios nacionales.

Art. 62. — Para ser miembro de los cuerpos técnicos se requerirá: ciudadanía argentina, veinticinco años de edad, tres años de ejercicio en la respectiva profesión o docencia universitaria.

Art. 63. — Los cuerpos técnicos serán dirigidos y representados, respectivamente, por un decano, designado anualmente por sus integrantes, entre los asignados a la justicia de la Capital Federal. El decano distribuirá la labor según las reglamentaciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia.

Art. 64. — La labor de los peritos (artículo 59, inciso b), será distribuida según las reglamentaciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia.

Art. 65. — Son obligaciones de los integrantes de los cuerpos técnicos y de los peritos:

- a) Practicar exámenes, experimentos y análisis, respecto de personas, cosas o lugares;
- b) Asistir a cualquier diligencia o acto judicial;
- c) Producir informes periciales.

Actuarán siempre a requerimiento de los jueces.

Art. 66. — La morgue judicial es un servicio del cuerpo médico forense que funcionará bajo la autoridad de su decano y la dirección de un médico, que debe reunir las mismas condiciones que los miembros del cuerpo médico forense.

Art. 67. — Corresponde a la morgue judicial:

- a) Proveer los medios necesarios para que los médicos forenses practiquen las autopsias y demás diligencias dispuestas por autoridades competentes;
- b) Exhibir por orden de autoridad competente los cadáveres que les sean entregados a los fines de su identificación;
- c) Formar y conservar el Museo de Medicina Legal.

Art. 68. — Para fines didácticos, la morgue judicial deberá:

- a) Facilitar a las cátedras de medicina legal de las universidades nacionales, las piezas del museo;
- b) Admitir en el acto de las autopsias, salvo orden escrita impartida en cada caso por la autoridad judicial competente, el acceso de profesores y estudiantes de medicina legal de las universidades nacionales, en el número, condiciones y con los recaudos que se establezcan en los reglamentos.

Art. 69. — El cuerpo médico forense contará con uno o más peritos químicos, que deberán reunir las mismas condiciones que sus miembros y tendrán sus mismas obligaciones.

Art. 70. — Para ser perito ingeniero o traductor, se requieren las mismas condiciones que para ser integrante de los cuerpos técnicos y para ser tasadores o intérpretes, las que se requieran por las reglamentaciones que se dicten por la Corte Suprema de Justicia. Tendrán las mismas obligaciones que los miembros de los cuerpos técnicos.

Art. 71. — Sin perjuicio de la distribución de tareas a que se refiere el artículo 63 de esta ley, los magistrados judiciales podrán disponer

cuando lo crean necesario, de los servicios de cualquiera de los integrantes de los cuerpos técnicos.

Art. 72. — Los integrantes de los cuerpos técnicos y los peritos:

- a) Prestarán juramento de desempeñar fielmente su cargo, ante el tribunal que designe la Corte Suprema de Justicia;
- b) No podrán ser designados peritos, a propuesta de parte en ningún fuero;
- c) Además de las designaciones de oficio efectuadas por los jueces en materia penal, podrán ser utilizados excepcionalmente por los jueces de los restantes fueros, cuando medien notorias razones de urgencia, pobreza o interés público;
- d) Todos los peritos para cuyo nombramiento se requiera título profesional, tendrán las mismas garantías y gozarán, como mínimo, de igual sueldo que los secretarios de primera instancia de la Capital.

Cuando el título requerido fuera universitario, los peritos tendrán la misma jerarquía y gozarán como mínimo de igual sueldo que los procuradores fiscales de primera instancia. Para todos los peritos regirá lo dispuesto en el artículo 16 de esta ley.

Art. 73. — Los remates judiciales serán realizados por intermedio de rematadores oficiales que se sortearán de una lista confeccionada por el Poder Ejecutivo y cuyos componentes estarán sometidos a la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.

#### *Disposiciones especiales transitorias*

Art. 74. — El Archivo General de los Tribunales, el Registro Público de Comercio y el Boletín Judicial, dependerán del Poder Ejecutivo de la Nación. Una ley especial establecerá su nueva organización y funcionamiento.

Art. 75. — La Secretaría Electoral de la Capital, el Fichero Nacional de Enrolados y las secretarías electorales de las capitales de provincias y territorios, seguirán a cargo del juez que actualmente las atiende.

Art. 76. — En lo no modificado por la presente ley, los tribunales nacionales continuarán rigiéndose por sus leyes de organización.

Art. 77. — Las causas en trámite seguirán hasta su terminación en los tribunales donde estén radicadas en el momento de entrar en vigencia esta ley.

Art. 78. — Las disposiciones de la presente ley referentes a los requisitos para la designación de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, no se aplicarán a los que estén des-

empeñando sus cargos en el momento de entrar en vigor.

Las disposiciones del artículo 12, en cuanto al título habilitante, no se aplicarán para cubrir las vacantes existentes o las que se produzcan dentro de los tres años de entrar en vigor esta ley, pudiendo proveerse las mismas con quienes, poseyendo título de escribano nacional o de procurador universitario, pertenezcan a la administración de justicia y siempre que en las respectivas leyes de organización vigentes a la fecha de la sanción de esta ley, tales títulos habilitaran para ocupar los cargos vacantes.

Art. 79. — La Corte Suprema de Justicia de la Nación, redistribuirá las secretarías y prosecretarías de los juzgados federales existentes a la fecha (ley 13.278, artículo 79) y las de los juzgados creados por la ley 12.833, entre los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil y comercial especial, en lo penal especial y en lo contencioso administrativo de la Capital Federal, teniendo en cuenta la labor asignada a unos y otros por esta ley.

Realizada esta redistribución, los prosecretarios, ujieres y empleados de los actuales juzgados de sentencia de la Capital Federal, que actúan en los trámites relacionados con las leyes 12.830 y 12.833, volverán a desempeñarse en sus anteriores funciones.

Art. 80. — Los actuales oficiales primeros de la justicia de paz actuarán como prosecretarios y reemplazarán al secretario en caso de recusación, licencia, ausencia u otro impedimento.

Art. 81. — A los efectos pertinentes de lo dispuesto en los artículos 49, 59 y 69, se considerará la antigüedad en la función judicial como equivalencia al ejercicio de la profesión de abogado. No requerirán nuevo nombramiento los magistrados cuya denominación o competencia actual cambie en virtud de esta ley.

Art. 82. — Hasta tanto se dicte la ley que reglamente la organización de los ministerios públicos, éstos continuarán desempeñándose bajo la superintendencia de la Corte Suprema, la que ajustará sus funciones de acuerdo a la organización que por esta ley se da a la justicia nacional.

Art. 83. — El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se imputará a rentas generales.

Art. 84. — Esta ley entrará en vigencia a los noventa días de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 85. — Dentro del término indicado en el artículo anterior, por esta vez y sin sujeción a lo establecido en el artículo 15 de esta ley, la Corte Suprema de Justicia, por vía de superintendencia, procederá a la reorganización de todo el personal de la justicia de la Nación.

Art. 86. — Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 87. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

## ANTECEDENTES

### Mensaje

Buenos Aires, 27 de agosto de 1949.

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a estudio de vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley de organización de la justicia nacional.

La nueva Constitución ha consagrado en el orden judicial, entre otras, dos innovaciones fundamentales, que la opinión pública y la doctrina jurídica venían reclamando desde hace muchos años, de modo persistente y unánime: la franca nacionalización de los tribunales de la Capital Federal y la casación para uniformar la inteligencia y aplicación del derecho común en todo el país.

Por otra parte, de seguro han de ser aprobadas las importantes e impostergables reformas de los códigos procesales en lo criminal y en lo civil y comercial, como asimismo otras regulaciones técnicas de las actividades jurisdiccionales de la Nación, que el Poder Ejecutivo ha proyectado y que vuestra honorabilidad ya conoce o irá conociendo en breve, con sus consiguientes exposiciones de motivos.

Todo ello impone la necesidad de un reajuste del organismo administrativo de la justicia, en procura de adaptarlo, en cuanto por ahora sea posible, a las perfectas y ágiles funciones que está llamado a desempeñar.

Claro es que estas modificaciones estructurales no podrían, en principio, adelantarse a la existencia efectiva de los códigos y demás instrumentos legales antes aludidos, y que, en todo caso, aquéllas y éstos deberán tener una adecuación recíproca correlativa y simultánea; pero en las circunstancias presentes nada impide, y al contrario, las conveniencias aconsejan cumplir de inmediato y sin demora, cuando menos, las reformas constitucionales generales del nuevo ordenamiento y competencia judicial que son definitivas y que por falta de reglamentación están creando ya, sobre todo en la Capital, diarias dificultades a los litigantes y a los jueces.

Tal el objeto de este proyecto de ley de organización de la justicia nacional, que el Poder Ejecutivo somete al Honorable Congreso con la esperanza de que, penetrado de su urgencia, le otorgue preferente atención.

Facilitará sin duda el estudio y sanción de esta ley, su carácter sencillo y su contenido eminentemente práctico, conformado a las enseñanzas de una larga experiencia sobre lo que debe conservarse, eliminarse o cambiarse. En lo principal, el proyecto respeta, con atento esmero, las normas constitucionales de la materia.

Comienza estableciendo lo que puede denominarse el estatuto del magistrado, sus condiciones de nombramiento, sueldo, incompatibilidades, autoridad e independencia. Del mismo modo fija las bases del estatuto de los funcionarios y empleados judiciales, los que no podrán ser removidos sino por justificadas causas de ineptitud o inconducta; crea el derecho de ascenso, fundado en la capacidad, eficiencia y antigüedad. Al respecto cabe señalar que, hasta ahora, estos funcionarios y empleados carecían de una garantía legal que les asegurase esos beneficios.

En lo relativo a la división de los tribunales nacionales inferiores a la Corte Suprema, el proyecto

mantiene provisionalmente la actual, con las modificaciones imprescindibles y forzosas que derivan de la nueva Constitución.

Se unifican las dos cámaras civiles de la Capital y se arbitra el medio racional y elástico de una distribución de tareas entre los juzgados de primera instancia, en forma más equitativa, cómoda y especializada.

Con el mismo criterio de distribución de trabajo se transforma la Cámara Federal de la Capital, cuyas funciones específicas excluyentes ya no tienen sentido local, en Cámara en lo contencioso-administrativo, con dos salas de tres miembros, como tribunal de alzada de cuatro juzgados de primera instancia, antes también federales. Se satisface así la notoria necesidad teórica y práctica de un órgano de competencia especial, para conocer en los numerosos y cada vez mayores casos judiciales, extraños al derecho común, que afectan activa o pasivamente al Estado en su calidad de poder público.

La restante sala en lo criminal de la referida Cámara Federal, se incorpora, como parece ahora natural y lógico, a la Cámara penal de la Capital, conservando dentro de este tribunal la misma competencia anterior. Esta sala entenderá de las apelaciones de los dos actuales juzgados federales de la Capital en lo criminal y correccional, que en lo sucesivo se denominarán juzgados nacionales en lo penal especial.

No se innova sobre la competencia de los otros diversos tribunales, sino en lo indispensable que resulta de la supresión de fueros y del carácter nacional reconocido a toda la justicia de la Capital. Quiere decir que esta competencia es restringida en parte para los jueces nacionales del interior y ampliada para los de esta ciudad, en el sentido de que nadie podrá invocar las causales de distinta nacionalidad o vecindad para pretender una justicia de excepción. En la Capital tampoco tendrá ninguna influencia el lugar donde se cometa un delito común, para sustraer su conocimiento de los jueces penales comunes.

Se da a la justicia de paz letrada una debida y más alta jerarquía en orden al valor de los juicios en que deberá intervenir. Se aumenta a seis el número de vocales de la Cámara Federal de La Plata, que es de cinco, a objeto de que dividida en dos salas logre una mayor eficacia y rapidez en sus pronunciamientos. Con el mismo fin se eleva a doce el número de vocales de la Cámara de apelaciones de la justicia del trabajo de la Capital, que es actualmente de nueve. Distribúyese en forma más justa, conforme a su labor y a las distancias, la apelación de los juzgados nacionales de los territorios, que corresponde a algunas cámaras federales de circuito y a las cámaras de los territorios del Sur y del Norte con asiento en Comodoro Rivadavia y Resistencia, respectivamente.

Recogiendo una prolongada y pacífica norma de la ley 4.055, de la justicia federal, renovada en las más recientes leyes 11.924, de la justicia de paz letrada, y 12.948, de la justicia del trabajo de la Capital, se amplía su aplicación a todos los tribunales nacionales, fijándose en los asuntos de valor económico el límite mínimo de un mil pesos para que proceda apelación.

El Poder Ejecutivo cree conveniente conservar el recurso ordinario de apelación en tercera instancia ante la Corte Suprema, como hasta ahora, para ciertos casos que afectan al patrimonio de la Nación, a

la existencia y seguridad de sus instituciones o a las relaciones internacionales, cuando por razones de derecho o por tratarse de cuestiones de hecho, no pudieran tales casos llegar de otro modo que por esa vía al conocimiento de aquel más alto tribunal. Salvo la jurisdicción originaria o los recursos extraordinarios atribuidos expresamente por la Constitución a la Corte, toda la demás competencia común de los tribunales nacionales, ha sido siempre y es materia privativa del Congreso, lo que autoriza a solicitarle el mantenimiento de la última instancia de aquel tribunal para los fallos del señalado carácter que este proyecto determina en el artículo 24, inciso 7º, reproduciendo leyes anteriores.

El actual régimen de la justicia penal, del trabajo y de paz letrada de la Capital, con las ligeras modificaciones antes aludidas, se conservará por ahora provisionalmente, a la espera de que vuestra honorabilidad, aceptando la activa colaboración del Poder Ejecutivo, ya ofrecida en esta materia con los sendos proyectos de códigos procesales en lo criminal y en lo civil enviados al Congreso, y otros de leyes complementarias y especiales en estudio, dé la reclamada oportunidad de una mejor organización de esos tribunales.

Como implícita consecuencia del carácter nacional de la justicia de la Capital, se incorporan a esta ley los juzgados creados por las leyes 12.836 y 12.833, para la represión del agio, disponiéndose que sus resoluciones sean recurribles para ante la Cámara en lo Penal.

En cuanto a los juzgados de esta materia en los territorios nacionales, se los convierte en juzgados letrados, en razón de que el reducido número de causas promovidas no justifica el mantenimiento de aquella competencia especial, y en cambio la extraordinaria labor de los actuales jueces letrados reclama el aumento que con economía de gastos se propicia.

Se echará de menos en este proyecto la reglamentación del ministerio público. Ello obedece al propósito del Poder Ejecutivo de tratar este instituto en forma nueva y completa mediante una ley especial, que en breve será elevada a estudio de vuestra honorabilidad. Mientras tanto, el ministerio público seguirá regido por las leyes orgánicas judiciales en vigencia, las cuales, asimismo, en todo lo demás no previsto en la presente, continuarán aplicándose.

La reglamentación de algunas oficinas auxiliares de la justicia contempla el más útil aprovechamiento de sus funciones específicas, conforme a la experiencia recogida.

En este aspecto, pese a lo transitorio del estatuto que se proyecta, el Poder Ejecutivo estima oportuno incorporar al mismo aquellas cláusulas referentes a ciertos servicios auxiliares que, por su naturaleza, no requerirán modificación alguna cuando vuestra honorabilidad sancione los modernos códigos de forma que la opinión pública reclama desde hace años con tanto empeño. Tal es el caso de los cuerpos de peritos, cuya colaboración con la justicia será siempre imprescindible, dentro de cualquier tipo de ordenamiento procesal que se adopte.

La ley 1.893 sólo se ocupa en un artículo del médico de los tribunales, y aunque las posteriores, 12.210 y 12.630, regulan con algún detalle sus funciones, distan de ser completas y aun pueden tildarse de erróneas en cuanto crean para los médicos forenses un

tribunal de enjuiciamiento extraño a su carácter de funcionarios administrativos, cuyo nombramiento y remoción corresponde al Poder Ejecutivo. Por lo demás, va de suyo que en este aspecto no cabe hacer, como hasta ahora, distingo alguno entre los peritos médicos y los demás técnicos auxiliares.

Se ha procurado centralizar dentro del cuerpo médico forense los servicios que le son afines, con el propósito de obtener mayor eficiencia y celeridad en los mismos. Así, la morgue judicial y el perito químico dependerán de aquél, evitándose con ello algunas demoras que ahora se observan en los trámites administrativos y en los dictámenes periciales.

La morgue judicial puede proporcionar inapreciable material de estudio y experimentación, casi único, a los profesores y estudiantes de medicina legal; pero el secreto del sumario y la ausencia de normas permisivas siempre impiden acceder a los requerimientos de los interesados y a las numerosas recomendaciones científicas formuladas en tal sentido. Con el fin de superar esas dificultades proyectanse los artículos mediante los cuales se mantiene el secreto, lográndose a la par un mejor aprendizaje de los futuros especialistas. El mismo criterio de centralización y jerarquización podrá advertirse en el articulado referente a los restantes servicios auxiliares, los cuales desempeñaban sus tareas sin ajustarse a uniformes directivas de gobierno y de control.

La nacionalización de la justicia de la Capital impone a su vez, como natural consecuencia, la unificación y nacionalización del Archivo de los Tribunales. A ello tienden las normas proyectadas, en las cuales si bien se mantiene substancialmente el sistema actual, se introducen algunas variantes aconsejadas por la experiencia. Entre ellas se destaca la que faculta al archivero para expedir directamente testimonios de documentos que no contengan obligaciones de dar o hacer, tal como sucede con los escribanos de registro, pero sin exigirse la comparecencia de las partes, ni de otro funcionario, recaudos inútiles tratándose del ejercicio de una función pública.

El Poder Ejecutivo cuenta ahora con un ministerio técnico, el de Justicia, mediante el cual podrá atender eficazmente las necesidades del Poder Judicial, descargando a éste de tareas extrañas a sus específicas funciones jurisdiccionales. Por ello, en el nuevo ordenamiento se propicia, conforme a la doctrina moderna, que todo organismo de señalado carácter administrativo, como el Archivo y el Registro Público de Comercio, dependan en forma directa del Poder Ejecutivo. Los hechos demuestran, por lo demás, que una doble dependencia conspira contra la buena marcha de tales reparticiones; acreditándose en cambio con el ejemplo del Registro Nacional de Reincidencia, las bondades del control centralizado en manos de la administración.

El Poder Ejecutivo desea para la Nación, como lo ha dicho en su plan de gobierno, una justicia más expeditiva. Particularmente en materia penal, abraza la esperanza de que «el procesado entre por una puerta y salga por la otra condenado o libre».

Numerosos son los medios a los que se ha recurrido para lograr ese ideal; de ellos cumplidamente se hace mérito en la exposición de motivos del proyecto de Código de Procedimientos en lo Criminal, mereciendo destacarse la adopción del juicio oral, que entre otras ventajas garantiza una mayor celeridad.

Mas poco vale la rapidez del proceso oral si los trámites anteriores al juicio demoran exageradamente su apertura, provocando así graves trastornos tanto para el procesado como para la certera investigación de los hechos.

El remedio consiste en proveer a la justicia de todos los elementos necesarios para que acelere al máximo la investigación preliminar. La experiencia demuestra que el personal ordinario de un juzgado no puede, de modo alguno, instruir en breve lapso ciertos sumarios de prueba difícil y abundante. Para estos hechos excepcionales, el proyecto crea la oficina de servicio auxiliar, cuyos empleados, bajo el control directo del tribunal de superintendencia y del juez de la causa, trabajarán intensamente en un solo proceso. No cabe duda que mediante ese refuerzo técnico ningún sumario, por complejo que sea, podrá demorarse en esa etapa preparatoria del juicio.

El Poder Ejecutivo confía, reiterando el deseo antes expresado, en que, persuadido el Honorable Congreso de los fundamentos jurídicos de este proyecto, del interés público a que responde y de la urgente necesidad que lo promueve, se digne prestarle su más pronta atención legislativa.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.  
Belisario Gache Pirán.

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

#### *Poder Judicial*

Artículo 1º—El Poder Judicial de la Nación será ejercido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales nacionales de la Capital Federal, los tribunales federales con asiento en las provincias, y los tribunales nacionales de los territorios.

#### *Magistratura nacional*

Art. 2º—Los jueces de la Nación son inamovibles y conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida mientras permanezcan en sus funciones.

Art. 3º—Los jueces de la Nación son nombrados por el presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Justicia, con acuerdo del Senado, y durante el receso del Congreso directamente en comisión hasta la próxima legislatura; y sólo pueden ser juzgados y removidos, los de la Corte Suprema, por juicio político ante el Senado, y los inferiores, por un tribunal judicial en la forma que la ley establece.

Art. 4º—Para ser juez de la Corte Suprema y procurador general de la Nación, se requiere ser argentino nativo, abogado graduado en universidad nacional, con diez años de ejercicio y treinta años de edad.

Art. 5º—Para ser juez de una cámara nacional de apelaciones se requiere ser argentino, abogado graduado en universidad nacional, con seis años de ejercicio y treinta años de edad.

Art. 6º—Para ser juez nacional de primera instancia se requiere ser argentino, abogado graduado en universidad nacional, con cuatro años de ejercicio y treinta años de edad.

Art. 7º.—Antes de asumir el cargo, los jueces prestarán juramento de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente y de conformidad con lo que prescribe la Constitución.

Art. 8º.—No podrán ser simultáneamente jueces del mismo tribunal los parientes o afines dentro del cuarto grado civil, y en caso de afinidad sobreviniente, el que la causare abandonará el cargo.

Art. 9º.—Es incompatible la magistratura judicial con toda intervención política, salvo la emisión del voto; con toda actividad comercial o profesional, y con todo empleo o cargo público o privado, excepto la comisión de estudios o la docencia universitaria.

Art. 10.—Los jueces residirán en el lugar donde ejerzan sus funciones, o a no más de cuarenta kilómetros de ese lugar, con autorización de la Corte Suprema. Concurrirán todos los días hábiles a sus despachos durante el horario reglamentario.

Art. 11.—La Corte Suprema de Justicia y las cámaras de apelación tendrán el tratamiento de excelentísimas y sus miembros el de excelencia; los jueces de primera instancia, el de señoría.

#### *De los funcionarios y empleados*

Art. 12.—Sin perjuicio de los requisitos que por reglamento establezca la Corte Suprema, para ser secretario de los tribunales nacionales se requiere ser argentino, mayor de edad y abogado graduado en universidad nacional. No podrá designarse secretario de primera instancia al pariente del juez dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Art. 13.—Para ser funcionario o empleado de la justicia nacional, cuando la ley no exija, además, otras condiciones especiales, se requiere ser argentino y poseer título de terminación de estudios secundarios. Queda exceptuado de este último requisito el personal de servicio y maestranza.

Art. 14.—La Corte Suprema de Justicia y las cámaras nacionales de apelación nombran sus funcionarios y empleados, y deciden respecto de las licencias que solicitaren. Los funcionarios y empleados dependientes de los jueces de primera instancia serán nombrados a propuesta de éstos por las cámaras de apelación. Los jueces podrán conceder a su personal licencias que no excedan de ocho días.

Art. 15.—Los funcionarios y empleados de la justicia nacional no podrán ser removidos sino por el mismo tribunal de su nombramiento y sólo por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo, con audiencia del interesado.

Art. 16.—Los funcionarios y empleados tendrán los derechos, deberes, responsabilidades e incompatibilidades que la ley o los reglamentos establezcan.

La Corte Suprema acordará un escalafón que asegure la estabilidad y el ascenso en la carrera, atendiendo ante todo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados debidamente calificada y a su antigüedad.

#### *Sanciones disciplinarias*

Art. 17.—Las faltas de los funcionarios, empleados y demás auxiliares de la justicia nacional, podrán ser sancionadas con prevención, apercibimiento, multa hasta quinientos pesos, suspensión no mayor de treinta días, cesantía y exoneración, por el tribunal

de que dependan, como lo establezca esta ley y los reglamentos.

En análogas circunstancias los jueces serán pasibles de las tres primeras sanciones mencionadas precedentemente, sin perjuicio de lo que disponga la ley sobre su enjuiciamiento y remoción.

Art. 18.—Podrán, asimismo, los tribunales y jueces imponer sanciones disciplinarias a los abogados, procuradores, litigantes y otras personas, por faltas que cometieren contra su dignidad o decoro en las audiencias o escritos o contra su autoridad obstruyendo el curso de la justicia. Además de las correcciones pertinentes indicadas en el artículo anterior, podrán imponer el arresto personal hasta de quince días.

Art. 19.—Las sanciones aplicadas por la Corte Suprema de Justicia o las cámaras nacionales de apelación sólo serán susceptibles de un reclamo de reconsideración ante el mismo tribunal.

Las sanciones dispuestas por los jueces de primera instancia que no sean de simple prevención, podrán ser apeladas dentro del tercer día.

#### *Auxilio debido a la justicia nacional*

Art. 20.—Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo nacional prestarán de inmediato todo el auxilio que les sea requerido por los jueces nacionales para el cumplimiento de sus resoluciones, y siempre que un juez nacional dirija un despacho a un juez provincial, para practicar actos judiciales, será cumplido el encargo. Lo mismo cuando un oficial ejecutor presente una orden escrita de un juez o tribunal nacional para efectuar un embargo, secuestro o prisión, las autoridades provinciales y personas particulares estarán obligadas a prestar el auxilio que él les requiera para el cumplimiento de su comisión.

#### *Corte Suprema de Justicia*

Art. 21.—La Corte Suprema de Justicia estará compuesta por cinco jueces y un procurador general. Tendrá su sede en la Capital Federal. Dictará su reglamento interno y económico y ejercerá superintendencia sobre todos los jueces y tribunales nacionales.

Art. 22.—Cuando por impedimento de sus miembros haya que integrar el tribunal, se hará por sorteo con los jueces que desempeñen la presidencia de las cámaras nacionales de apelación de la Capital, o con sus substitutes legales, debiendo todos reunir las condiciones exigidas para ser miembro de la Corte.

Art. 23.—Las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de sus ministros, siempre que éstos concordaren en la solución del caso. Si hubiere discordia se requerirán los votos necesarios para obtener mayoría absoluta de opiniones.

Art. 24.—La Corte Suprema de Justicia conocerá:

1º Originaria y exclusivamente en las causas que se susciten entre la Nación o una provincia o sus vecinos con un Estado extranjero; en las causas concernientes a embajadores, ministros plenipotenciarios o cónsules extranjeros, y en las causas entre la Nación y una o más provincias o de éstas entre sí. En estos supuestos la Corte Suprema no procederá de oficio y sólo ejercerá jurisdicción en los casos contenciosos en que sea requerida a instancia de parte.



No se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero sin requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio.

A los efectos pertinentes de la primera parte de este inciso se considerará vecinos:

- a) A las personas físicas domiciliadas en el país desde dos o más años antes de la iniciación de la demanda, cualquiera fuese su nacionalidad;
- b) A las personas jurídicas de derecho público del país;
- c) A las demás personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país;
- d) A las sociedades y asociaciones sin personalidad jurídica, cuando la totalidad de sus miembros se halle en la situación prevista en el apartado a).

Son causas concernientes a embajadores o ministros plenipotenciarios extranjeros, las que les afectan directamente por debatirse en ellas derechos que les asisten o porque comprometen su responsabilidad, así como las que en la misma forma afectan a las personas de su familia o a las de la embajada o legación.

No se dará curso a las acciones contra las personas mencionadas en el punto anterior, sin requerirse previamente del respectivo embajador o ministro plenipotenciario la conformidad de su gobierno para someterlas a juicio.

Son causas concernientes a los cónsules extranjeros las seguidas por hechos o actos cumplidos en el ejercicio de sus funciones propias, siempre que en ellas se cuestione su responsabilidad civil o criminal.

- 2º Originariamente y por recurso extraordinario en el modo que la ley establezca, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución Nacional y se controvieran por parte interesada;
- 3º Por recurso extraordinario en casación y del pedido de revisión de la jurisprudencia, en la interpretación e inteligencia de los códigos civil, de comercio, penal, de minería, aeronáutico, sanitario y de derecho social, o leyes nacionales, en la forma que la ley determine;
- 4º En los recursos de reposición y aclaratoria de sus propias resoluciones;
- 5º En los recursos directos por apelación denegada;
- 6º En los recursos de queja por retardo de justicia en contra de las cámaras nacionales de apelación;
- 7º Por apelación ordinaria, de las sentencias definitivas de los tribunales nacionales de segunda instancia, en los siguientes casos:

- a) Causas en que la Nación directamente sea parte, cuando el valor disputado en último término, sin sus accesorios, sea superior a 50.000 pesos;

- b) Extradición de criminales reclamados por países extranjeros;
- c) Causas a que dieren lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra, sobre salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles;
- d) Causas criminales por delitos contra la seguridad del Estado, de la Nación, o contra los poderes públicos y el orden constitucional, cuando la pena aplicable exceda de seis años de prisión o reclusión;
- e) De las suscitadas entre una provincia y los vecinos de otra.

8º La Corte Suprema dirimirá las cuestiones de competencia planteadas entre jueces o tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba hacerlo. Decidirá asimismo sobre el juez competente en los casos en que su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia.

#### *Cámaras de apelación*

Art. 25. — Las cámaras de apelación conservarán su actual organización y competencia, con las modificaciones que resultan de la Constitución Nacional y de esta ley.

Art. 26. — Contra las sentencias de las cámaras de apelación no habrá recurso alguno salvo los extraordinarios constitucionales en los casos que la ley establezca y el ordinario de apelación previsto en el artículo 24, inciso 7º.

Art. 27. — Los tribunales de apelación podrán dividirse en salas de tres miembros. A los fines de reglamentar sus funciones de superintendencia y orden procesal sobre la propia cámara y juzgados de primera instancia, en cuanto les sea delegada esta facultad por la Corte Suprema, y para unificar la jurisprudencia de las salas o evitar fallos contradictorios cuando no exista interpretación de la Corte Suprema sobre la materia, cada cámara se reunirá en tribunal pleno.

Art. 28. — Los acuerdos plenarios pueden ser adoptados con asistencia de la mayoría absoluta de los miembros del tribunal, siempre que éstos concordaran en la solución del caso. Si hubiere discordia se fallará con los vocales necesarios para obtener mayoría absoluta de opiniones. Los vocales que no hubieren expuesto su criterio en la primera convocatoria, deberán simplemente adherir a los votos emitidos por sus colegas. La opinión de la mayoría puede ser llevada por uno de los jueces que la sostengan; la de la minoría puede serlo del mismo modo.

Art. 29. — Las sentencias definitivas de las cámaras o salas de apelación, en los procesos ordinarios de conocimiento, serán por deliberación y voto fundado de todos sus miembros previo sorteo de estudio, sin que ninguno de ellos pueda simplemente adherir al voto de otro. La mayoría debe ser personalmente la misma para las cuestiones de hecho y de derecho.

En las demás causas las sentencias podrán ser redactadas en forma impersonal.

Art. 30. — Las diligencias procesales se cumplirán ante la sala que conozca o deba conocer definitivamente en cada juicio.

*Cámara Civil de la Capital*

Art. 31. — Las dos cámaras de apelaciones en lo civil de la Cámara Federal constituirán un solo tribunal que se denominará Cámara Civil de la Capital.

Art. 32. — La integración de las salas o del tribunal se hará por sorteo entre los demás miembros de éste; luego, del mismo modo, con los de la Cámara Comercial y por último con los jueces de primera instancia en lo civil.

Art. 33. — La cámara elegirá por mayoría absoluta un presidente y un vicepresidente, por un año, no reelegibles sin intervalo de un período. El vicepresidente compartirá las funciones del presidente en la extensión y forma que se determine.

Art. 34. — La Cámara Civil de la Capital tendrá la competencia que correspondía a las cámaras de apelaciones en lo civil, con las modificaciones que resultan de la Constitución Nacional y de esta ley.

Art. 35. — Las autenticaciones a que se refiere la ley 44 modificada por la ley 5.133, podrán ser hechas directamente por el funcionario que la cámara designe.

*Cámara Comercial de la Capital*

Art. 36. — La Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital se denominará Cámara Comercial de la Capital.

Art. 37. — La integración de las salas o del tribunal se hará por sorteo entre los demás miembros de éste; luego, del mismo modo, con los de la Cámara Civil y por último con los jueces de primera instancia en lo comercial.

Art. 38. — A pedido de la mayoría de los miembros de la Cámara Civil o Comercial, podrá convocarse a tribunal pleno de ambas, a los fines de unificar la jurisprudencia o evitar fallos contradictorios cuando no exista interpretación de la Corte Suprema sobre la materia. Rige al respecto lo establecido anteriormente para los acuerdos plenarios. El tribunal será presidido por el presidente de la cámara que hubiere pedido la convocatoria.

*Cámara en lo Contenciosoadministrativo de la Capital Federal*

Art. 39. — La actual Cámara Federal de Apelación de la Capital se denominará Cámara en lo Contenciosoadministrativo de la Capital. Se compondrá de seis jueces que formarán salas de tres.

Art. 40. — Cuando por impedimento de sus miembros haya que integrar el tribunal se hará por sorteo con los miembros de la Cámara Civil y en su defecto con los jueces de lo contenciosoadministrativo de la Capital.

Art. 41. — La Cámara por mayoría absoluta elegirá un presidente y un vicepresidente, por un año, no reelegibles sin intervalo de un período.

Art. 42. — Este tribunal será de apelación de las resoluciones de los jueces en lo contenciosoadministrativo de la Capital. Conocerá, además, de los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de organismos administrativos en los casos autorizados por las leyes de previsión social, de los recursos contra las resoluciones del intendente municipal de la Capital en asuntos de carácter contenciosoadministrativo, y contra las resoluciones del jefe de policía en materia de derecho de reunión.

*Cámara de Paz de la Capital*

Art. 43. — La actual Cámara de Apelaciones de la Justicia de Paz Letrada de la Capital se denominará Cámara de Paz de la Capital. Se integrará por sorteo entre los jueces de primera instancia dependientes de ella.

*Cámara del Trabajo de la Capital*

Art. 44. — La actual Cámara de Apelaciones de la Justicia del Trabajo de la Capital se denominará Cámara del Trabajo de la Capital. Se compondrá de doce miembros que formarán salas de tres, y se integrará por sorteo entre los jueces de primera instancia dependientes de ella.

*Cámara Penal de la Capital*

Art. 45. — La actual Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital se denominará Cámara Penal de la Capital.

Art. 46. — Formará parte de este tribunal la actual sala en lo criminal y correccional de la Cámara Federal de Apelación de la Capital, la que constituirá una sala que conocerá de los recursos contra las resoluciones de los jueces en lo penal especial.

En los casos del artículo 4º de la ley 12.327, esta sala será integrada por sorteo con otros dos miembros del mismo tribunal.

Art. 47. — Cuando por impedimento de sus miembros haya que integrar el tribunal, se hará por sorteo con los jueces dependientes de la misma, comenzando por los de sentencia y en lo penal especial y siguiendo con los de instrucción y en lo correccional.

Art. 48. — Créase bajo la dependencia de la cámara la oficina de servicio auxiliar con los empleados que fije la ley. Dichos empleados deberán ser puestos de modo temporario a disposición de los jueces de instrucción y en lo penal especial, con el solo objeto de lograr una más pronta substanciación de las causas que por su naturaleza o complejidad no puedan atenderse eficazmente con el personal de los juzgados.

*Cámaras federales de circuito*

Art. 49. — La Cámara Federal de La Plata se compondrá de seis miembros divididos en dos salas de tres. Dependerán de ella los juzgados federales de dicha ciudad, San Nicolás Mercedes, Azul y los juzgados letrados de La Pampa.

Art. 50. — Dependerán de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el juzgado federal de dicha ciudad y los juzgados letrados de Río Negro y de Neuquén.

Art. 51. — Dependerán de la Cámara Federal de Paraná los juzgados federales de Corrientes, Paraná y Concepción del Uruguay y los juzgados letrados de Misiones.

Art. 52. — Las restantes cámaras federales de Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán conservarán su actual competencia de apelación.

*Cámaras de territorios nacionales*

Art. 53. — Las actuales cámaras de apelaciones de territorios del Norte y del Sur se denominarán respectivamente Cámara de Territorios del Norte y Cámara de Territorios del Sur.

Art. 54. — Dependerán de la Cámara de Territorios del Norte, con asiento en Resistencia, los juzgados le-

trados de primera instancia del Chaco y de Formosa.

Art. 55. — Dependerán de la Cámara de Territorios del Sur, con asiento en Comodoro Rivadavia, los juzgados letrados de Chubut, Santa Cruz, zona militar de Comodoro Rivadavia y Gobernación Marítima de Tierra del Fuego.

#### *Juzgados de primera instancia*

Art. 56. — Los juzgados de primera instancia conservarán su organización y competencia actuales, con las modificaciones que resultan de la Constitución Nacional y de esta ley.

Art. 57. — Las resoluciones de los jueces de primera instancia no serán susceptibles de recursos ordinarios para ante las cámaras, cuando el valor disputado en causas no penales y en último término, sin sus accesorios, no exceda de mil pesos moneda nacional.

#### *Juzgados de primera instancia en lo civil de la Capital*

Art. 58. — La Corte Suprema podrá disponer la distribución por especialidades de las causas de competencia de los jueces civiles de primera instancia en la Capital, según las necesidades de la administración de justicia, y sin que esta medida pueda privar a los jueces del conocimiento de los asuntos pendientes.

Art. 59. — El turno de los juzgados será establecido por número de causas en forma rotativa. No podrán fundarse cuestiones de competencia en razones de turno.

#### *Juzgados de primera instancia en lo comercial de la Capital*

Art. 60. — Los juzgados de primera instancia en lo comercial de la Capital conocerán de los asuntos regidos por las leyes comerciales. Entenderán en todos los hechos, actos y contratos concernientes a los medios de transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, aunque sea parte la Nación, sus reparticiones autárquicas o la municipalidad, y en las causas contenciosas fundadas en las leyes 111 y 3.975.

Art. 61. — Rige para estos juzgados lo dispuesto en los artículos 58 y 59.

#### *Juzgados de primera instancia en lo contencioso-administrativo de la Capital*

Art. 62. — Los actuales juzgados federales en lo civil y comercial de la Capital y los de lo contencioso-administrativo creados por la ley 13.278, se denominarán juzgados en lo contencioso-administrativo de la Capital.

Art. 63. — Estos juzgados conocerán:

- 1º De las causas en que sea parte la Nación o sus entidades autárquicas, como personas de derecho público no atribuidas a la competencia de otros jueces;
- 2º De las causas que versen sobre impuestos o tasas de carácter general para toda la República;
- 3º De las causas regidas por leyes especiales no incorporadas ni complementarias de los códigos comunes, ni atribuidas a la competencia de otros jueces;

4º De los recursos contra resoluciones administrativas no penales, que las leyes atribuyen a los jueces federales.

Art. 64. — La Secretaría Electoral de la Capital y el Fichero Nacional de Enrolados estarán a cargo del juez en lo contencioso-administrativo más antiguo.

Art. 65. — Rige para estos juzgados lo dispuesto en los artículos 58 y 59.

#### *Juzgados de paz de la Capital*

Art. 66. — Con excepción de las causas mencionadas en el artículo 60, 2º apartado, los juzgados de paz de primera instancia de la Capital conocerán:

- 1º a) De los asuntos civiles y comerciales en que el valor cuestionado no exceda de cinco mil pesos moneda nacional;
- b) De los juicios sucesorios cuyo haber hereditario no exceda prima facie de veinte mil pesos moneda nacional;
- c) De los concursos civiles cuyo pasivo no sobrepase la suma de veinte mil pesos moneda nacional;
- d) De las pequeñas quiebras a las que se refiere el título XXII de la ley 11.719.

La competencia de los juzgados mencionados subsistirá en los juicios sucesorios aun cuando hubiese contestación sobre el carácter de herederos de las personas que se presenten como tales, y aun cuando el haber hereditario exceda en definitiva hasta en un 25 % de la suma fijada en el apartado b).

e) Quedan exceptuados de la competencia de los juzgados de paz los interdictos y las venias, así como también los asuntos que se refieran al derecho de familia, con excepción de la hipótesis especificada en el apartado b).

- 2º De las demandas contra los juicios universales enumerados en el inciso anterior, cualquiera sea su importancia;
- 3º De las informaciones sumarias que se refieran a los juicios de competencia del tribunal;
- 4º De las demandas por desalojo, rescisión de contratos de locación y cobro de alquileres, cualquiera sea su importancia, haya o no contrato escrito;
- 5º De las demandas reconconvencionales, cualquiera sea su monto.

#### *Juzgados del trabajo de la Capital*

Art. 67. — Los juzgados del trabajo de la Capital tendrán la competencia que les atribuye la ley 12.948, aunque en las causas sea parte la Nación, sus reparticiones autárquicas o la municipalidad. Los jueces del trabajo serán nombrados en la forma prevista en el artículo 3º.

#### *Juzgados de primera instancia en lo penal de la Capital*

Art. 68. — Los juzgados de sentencia, instrucción y correccionales de la Capital conservarán su actual organización y competencia. Los correccionales entenderán además en segunda y última instancia en

los recursos contra las resoluciones de la municipalidad o de sus jueces de faltas y de la policía, cuando la pena impuesta exceda de cinco días de arresto o cincuenta pesos de multa.

Art. 69. — Los juzgados federales en lo criminal y correccional de la Capital se denominarán juzgados en lo penal especial de la Capital y conservarán su actual competencia, con excepción de las causas que les correspondían sólo por razón de lugar.

Art. 70. — Los juzgados creados por la ley 12.833 para la Capital Federal conservarán su actual competencia y dependerán de la cámara penal de la Capital, ante la cual serán apelables sus resoluciones cuando corresponda. Terminada la vigencia de la ley 12.833 y sus complementarias, la Corte Suprema les atribuirá nuevas funciones dentro del fuero penal.

Art. 71. — Los prosecretarios, ujieres y empleados de los juzgados de sentencia, que actúan en los trámites relacionados con las leyes 12.830 y 12.833, pasarán a los respectivos juzgados de estas leyes, con igual categoría.

#### *Juzgados federales de sección*

Art. 72. — Los juzgados federales con asiento en las provincias conservarán su actual competencia y organización, con las modificaciones que resultan de la Constitución y de esta ley. Conocerán:

- 1º De las causas civiles entre la provincia en que tuvieren su asiento y algún vecino o vecinos de otra o de la Capital Federal. Cuando hubiere más de un juez de sección en la provincia, entenderán en estas causas los que tengan su asiento en la capital de la misma;
- 2º De todos los hechos, actos y contratos concernientes a la navegación y el comercio aeronáuticos;
- 3º De las causas que versen sobre negocios particulares de los cónsules extranjeros y de todas las concernientes a los vicecónsules extranjeros;
- 4º De los recursos de hábeas corpus, cuando la amenaza, restricción o privación de la libertad de una persona provenga de una autoridad nacional, o afecte a un individuo integrante o dependiente de una autoridad nacional.

#### *Juzgados de los territorios nacionales*

Art. 73. — Los juzgados letrados de los territorios nacionales conservarán su actual organización y competencia. Quedan suprimidas las consultas a que se refiere el artículo 17, inciso 4º, de la ley 4.055.

Créase un juzgado letrado en la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego, con competencia territorial en la misma y zona Antártida Argentina.

Art. 74. — Los juzgados creados por la ley 12.833 se convierten en juzgados letrados, con la misma competencia que los mencionados en el artículo anterior. Los de Santa Cruz, Neuquén, Santa Rosa, Resistencia, Formosa y Misiones tendrán su asiento en dichos lugares. El de Rawson, en la zona militar de Comodoro Rivadavia, y el de Viedma, en Fuerte General Roca.

Art. 75. — Los jueces de paz de los territorios e islas nacionales serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna del juez letrado de la circunscripción correspondiente.

Para ser juez de paz se requiere: ser argentino, saber leer y escribir, treinta años de edad y antecedentes honorables.

Los jueces de paz permanecerán en sus funciones mientras dure su idoneidad y buena conducta y sólo podrán ser removidos por resolución de la cámara de apelaciones de la circunscripción, previo sumario y audiencia del interesado.

El secretario y demás personal de estos juzgados será designado por el juez letrado a propuesta del de paz.

#### *Cuerpos técnicos y peritos auxiliares de la justicia nacional de la Capital*

Art. 76. — Los cuerpos técnicos y peritos auxiliares de la justicia nacional funcionarán bajo la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 77. — Los funcionarios y empleados de los distintos organismos serán nombrados y removidos por el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo que establece el decreto 33.227/44 y percibirán el sueldo que les asigne la ley de presupuesto.

Art. 78. — En la Capital Federal habrá cuerpos de médicos forenses, de contadores y de peritos calígrafos.

Art. 79. — Para ser miembro del cuerpo médico se requiere: ciudadanía argentina, veinticinco años de edad, tres años de ejercicio en la profesión o en la docencia universitaria y título de médico legista expedido por universidad nacional o, en defecto de éste, acreditar antecedentes científicos de especial versación en la materia.

Art. 80. — El cuerpo médico forense estará dirigido y representado por un médico decano designado rotativa y anualmente por el cuerpo.

Art. 81. — La labor del cuerpo médico será organizada por el decano distribuyéndola entre los miembros, según convenga a la mayor eficacia y celeridad de sus funciones.

Esta organización será sometida previamente a la aprobación del tribunal de superintendencia.

Art. 82. — Son obligaciones de los médicos forenses:

- a) Practicar los exámenes y expedir los informes requeridos por las autoridades de la justicia en lo penal;
- b) Concurrir de inmediato a los lugares adonde sean llamados por las mismas autoridades, para coadyuvar en la investigación de los hechos;
- c) Comparecer a las audiencias para las que sean citados a fin de prestar las declaraciones y suministrar los informes que se les exijan o realizar cualquier otra diligencia vinculada a sus funciones;
- d) Expedir los informes que les sean requeridos por razón de superintendencia.

Art. 83. — Los médicos que actualmente desempeñan sus tareas ante los tribunales del trabajo y justicia de paz letrada de la Capital Federal, integrarán el cuerpo médico de los tribunales, sin perjuicio de las funciones específicas que la ley o los reglamentos les acuerden.

Art. 84. — La morgue judicial es un servicio del cuerpo médico forense, supeditada a la autoridad del jefe del cuerpo. Estará a cargo de un director, con título de médico expedido por universidad nacional y contará con el personal que le asigne la ley de presupuesto.

Art. 85. — Corresponde a la morgue judicial:

- a) Proveer los medios necesarios para que los médicos forenses practiquen las autopsias y demás diligencias dispuestas por la autoridad judicial;
- b) Formar y conservar el museo de medicina legal;
- c) Exhibir al público los cadáveres que les sean entregados por cualquier autoridad judicial a los fines de la identificación;
- d) Facilitar los medios para que se practiquen las autopsias dispuestas por las autoridades no judiciales de la Capital Federal.

Art. 86. — Para fines didácticos la morgue judicial deberá:

- a) Facilitar a la cátedra de medicina legal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires las piezas del museo;
- b) Admitir en el acto de las autopsias, salvo órdenes escritas impartidas en casos especiales por la autoridad judicial competente, el acceso en número no mayor de cinco profesores y estudiantes de la cátedra de medicina legal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Los estudiantes deberán concurrir acompañados por un profesor de dicha cátedra y tanto uno como otros se obligarán mediante actas suscritas ante el director de la morgue a guardar secreto de los actos que ante ellos pasaren. La acción por violación de este secreto será pública.

Art. 87. — El director de la morgue judicial llevará un registro en el que se dejará constancia de las piezas del museo facilitadas a la cátedra de medicina legal y el nombre, apellido y condiciones individuales de las personas admitidas a presenciar las autopsias.

Art. 88. — El cuerpo médico forense de la Capital Federal contará con un perito químico que deberá reunir las siguientes condiciones: ciudadanía argentina, mayoría de edad, título de químico expedido por universidad nacional con tres años de ejercicio en la profesión o en la docencia universitaria.

El perito químico deberá:

- a) Practicar las diligencias y expedir los informes requeridos por la justicia en lo penal;
- b) Practicar los análisis y demás experimentaciones que el cuerpo médico le requiera por intermedio del decano, para mejor ilustración de los informes;
- c) Comparecer a las audiencias para las que sea citado a fin de prestar las declaraciones y suministrar los informes que le soliciten.

Art. 89. — El Cuerpo Médico Forense tendrá bajo su dependencia los auxiliares técnicos necesarios para el mejor servicio, conforme lo establezca la ley de presupuesto y los respectivos reglamentos.

Art. 90. — Créase la oficina del Cuerpo de Contadores de los Tribunales de la Capital Federal.

Para ocupar el cargo de contador oficial de los Tribunales de la Capital Federal se requiere: ciudadanía argentina, mayoría de edad y título de doctor en ciencias económicas o de contador público expedido por universidad nacional, con tres años de ejercicio en la profesión o en la docencia universitaria

Art. 91. — El cuerpo de contadores oficiales será dirigido y representado por uno de sus miembros elegido rotativa y anualmente por el cuerpo. Estará integrado por los contadores y personal que establezca la ley de presupuesto. El contador director sin perjuicio de sus funciones específicas desempeñará iguales tareas que los demás componentes del cuerpo y ajustará su cometido a iguales obligaciones que las dispuestas en el artículo 81 para el decano del cuerpo médico.

Art. 92. — Son obligaciones de los contadores oficiales:

- a) Practicar las pericias y expedir los informes requeridos por las autoridades de la justicia en lo penal;
- b) Comparecer a las audiencias a que sean citados a prestar las declaraciones y suministrar los informes que le soliciten.

Art. 93. — Créase la oficina del Cuerpo de Peritos Calígrafos de los Tribunales de la Capital Federal.

Art. 94. — Para ocupar el cargo de perito calígrafo se requiere ser ciudadano argentino, mayor de edad, con título de calígrafo público expedido por universidad nacional y tres años de ejercicio en la profesión.

Art. 95. — El Cuerpo de Peritos Calígrafos oficiales será dirigido y representado por uno de sus miembros elegido rotativa y anualmente por el cuerpo. Estará integrado por los peritos calígrafos y por el personal que establezca la ley respectiva. El calígrafo director, sin perjuicio de sus funciones específicas, desempeñará iguales tareas que los demás componentes del cuerpo y ajustará su cometido a las normas y obligaciones que establece el artículo 81 para el decano del cuerpo médico.

Art. 96. — Son obligaciones de los peritos calígrafos oficiales:

- a) Practicar las pericias y expedir los informes requeridos por la justicia en lo penal;
- b) Comparecer a las audiencias a que sean citados a prestar declaraciones y suministrar los informes que le soliciten.

Art. 97. — Para ocupar el cargo de perito ingeniero se requiere: ciudadanía argentina, mayoría de edad, título de ingeniero civil o industrial expedido por universidad nacional y tres años de ejercicio en la profesión o en la docencia universitaria.

Art. 98. — Son obligaciones del perito ingeniero oficial:

- a) Practicar las pericias y expedir los informes requeridos por la justicia en lo penal;
- b) Concurrir de inmediato a los lugares adonde sea llamado por las mismas autoridades para coadyuvar en la investigación de los hechos;
- c) Comparecer a las audiencias a que sea citado a prestar declaraciones o suministrar los informes que se les soliciten.

Art. 99. — Para ocupar el cargo de traductor e intérprete oficial de los tribunales de la Capital Federal se requiere: mayoría de edad y título de traductor público nacional.

Art. 100. — Es obligación de los peritos intérpretes y traductores cumplir las diligencias que les enco-

mienden las autoridades de la justicia en lo penal y concurrir a las audiencias cuando sus servicios fueren necesarios.

Art. 101. — Para ocupar el cargo de tasador oficial de los tribunales de la Capital Federal se requiere ciudadanía argentina y mayoría de edad.

Art. 102. — Es obligación del perito tasador evacuar las pericias que le sean solicitadas por las autoridades de la justicia en lo penal. El tasador deberá fundar la razón de sus apreciaciones y concurrir a las audiencias a que sea citado para declarar o ampliar sus informes. Deberá concurrir, asimismo, diariamente, a la oficina que designe el tribunal de superintendencia, a los efectos de notificarse de las resoluciones judiciales pertinentes.

*Disposiciones comunes a los cuerpos técnicos y demás auxiliares de la justicia*

Art. 103. — Sin perjuicio de la distribución de tareas efectuadas por los jefes de los cuerpos técnicos, la autoridad judicial podrá disponer cuando sea necesario de los servicios de otros integrantes del cuerpo que corresponda.

Art. 104. — Los peritos prestarán juramento de desempeñar fielmente su cargo ante el tribunal que designe la Corte Suprema; este juramento los exime de hacerlo nuevamente en las causas en que sean designados.

Art. 105. — Los peritos oficiales no podrán reclamar honorarios en los asuntos en que intervengan por nombramientos de oficio en los distintos fueros de la Capital Federal. No podrán tampoco ser designados peritos a propuesta de parte en ningún fuero.

Art. 106. — Además de las designaciones de oficio efectuadas por los jueces en lo penal y con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 83, los servicios de los peritos oficiales podrán ser requeridos excepcionalmente por los jueces de los restantes fueros de la Capital cuando mediaren notorias razones de urgencia, pobreza o de interés público.

Art. 107. — Todos los peritos para cuyo nombramiento se requiera título profesional tendrán la misma jerarquía y gozarán, como mínimo, de igual sueldo que los secretarios de primera instancia de la Capital.

Art. 108. — Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9º y 10 de la ley 11.833, los patronatos de liberados serán considerados auxiliares de la Justicia en lo Penal en cuanto al cumplimiento de las obligaciones emergentes del artículo 13, inciso 5º del Código Penal.

Deberán remitir anualmente a la Corte Suprema o al Tribunal de Superintendencia que ésta designe una memoria detallada de su gestión.

*Oficina de mandamientos y notificaciones para la justicia de la Capital Federal*

Art. 109. — La actual oficina organizada por decreto del Poder Ejecutivo 25.559, de 1948, tendrá a su cargo la diligencia de los mandamientos y notificaciones que expidan las Cámaras en lo Civil, Comercial, Contencioso-administrativo, de Paz y los juzgados de primera instancia dependientes de las mismas.

La Corte Suprema podrá encomendar a esa oficina iguales diligencias del Tribunal.

Art. 110. — Quedan incorporados a esa oficina los oficiales de justicia de los actuales Juzgados Federales en lo Civil y Comercial.

Art. 111. — La Corte Suprema ejerce superintendencia sobre la oficina de Mandamientos y Notificaciones, debiendo reglamentar su organización y funcionamiento.

*Archivo de los Tribunales*

Art. 112. — El Archivo General de los Tribunales de la Capital dependerá del Ministerio de Justicia; estará a cargo de un director y un subdirector y contará además con los funcionarios y empleados que la ley determine.

El director y el subdirector deberán ser argentinos, abogados o escribanos con tres años de ejercicio profesional o de funciones judiciales o administrativas afines.

El subdirector substituirá al titular, con todas sus facultades y obligaciones en caso de ausencia, impedimento o licencia de éste.

Art. 113. — El archivo se formará:

- 1º Con los protocolos de todas las escribanías de registro y de marina, excepto los correspondientes a los últimos cuatro años que quedarán en poder de los escribanos;
- 2º Con los protocolos de escrituras mencionadas en el artículo 9º de la acordada de la Corte Suprema del 12 de octubre de 1863;
- 3º Con los expedientes terminados o paralizados que remitan los juzgados o tribunales nacionales de la Capital;
- 4º Con los segundos ejemplares de los tomos de actas del Registro Civil de la Capital;
- 5º Con dos ejemplares diarios del Boletín Oficial.

Art. 114. — Los protocolos, expedientes y tomos del Registro Civil serán recibidos por el director, previo examen de su estado, haciendo constar el número de sus páginas y las circunstancias especiales que notare; si encontrare alguna irregularidad o infracción a las leyes fiscales, deberá devolverlos, dando cuenta de ello a la autoridad competente. Igual procedimiento observará con respecto a las planillas extractos mencionados en la ley 12.997.

Art. 115. — El archivo será organizado en oficinas, colocándose por separado los documentos que se mencionan en el artículo 113. Se formarán índices especiales de cada oficina, sin perjuicio del fichaje obligatorio de toda la documentación existente.

En los índices de expedientes se determinará el número o letra del juzgado y de la secretaría, así como los nombres del juez, secretario, de las partes y el objeto del juicio.

Art. 116. — El director expedirá por orden judicial certificados y testimonios de las escrituras, expedientes y otros documentos del archivo, observando las formalidades prescritas por las leyes de la materia. Expedirá asimismo testimonios o certificados que se le soliciten directamente cuando se tratare de documentos que no contengan obligaciones de dar o hacer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1006 y 1007 del Código Civil y sin necesidad de la citación previa o de la comparecencia del oficial público que establece el artículo 1008 del mismo código.

Art. 117. — El archivo no percibirá derecho alguno por los testimonios o certificados que expida, debiendo los interesados suministrar los sellos necesarios para su expedición, cuyo valor fijará la ley respectiva.

Art. 118. — Las partes y profesionales podrán interiorizarse de las escrituras y documentos existentes en el archivo de acuerdo con la reglamentación que al respecto dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 119. — Los documentos que se mencionan en el artículo 113, incisos 1º, 2º, 4º y 5º, no podrán ser

retirados del archivo sino por caso fortuito o fuerza mayor.

Art. 120. — Los expedientes podrán retirarse del archivo en las circunstancias previstas en el artículo anterior o en virtud de orden escrita de juez competente, por el término de sesenta días, vencidos los cuales el director reclamará la devolución, que no podrá ser demorada más de diez días, salvo causa justificada, que se le hará saber. Si en ese plazo no fuere devuelto el expediente ni se dieren explicaciones satisfactorias, el director dará cuenta a la Corte Suprema de Justicia, para que aplique la sanción correspondiente a quien ocasione el retardo.

Art. 121. — Incorpórase al Archivo General de los Tribunales la sección selección y destrucción de expedientes, la que actuará de acuerdo con la ley 12.997, requiriéndose título de abogado o escribano para el funcionario que esté al frente de la misma.

#### Disposiciones especiales y transitorias

Art. 122. — En lo no modificado por la presente ley, los tribunales nacionales continuarán rigiéndose por sus leyes de procedimiento y de organización vigentes.

Art. 123. — El Registro Público de Comercio dependerá del Poder Ejecutivo. Una ley especial establecerá su nueva organización y funciones.

Art. 124. — Las causas en trámite proseguirán hasta su terminación en los tribunales donde estén radicadas en el momento de entrar en vigencia esta ley.

Art. 125. — Las disposiciones de la presente ley, referentes a los requisitos para la designación de funcionarios y empleados judiciales, no se aplicarán a los que actualmente desempeñan los respectivos cargos. En la distribución de funciones que exija la nueva organización de la justicia de la Capital, se mantendrá el personal actual con su jerarquía y sueldo.

Art. 126. — A los efectos pertinentes de lo dispuesto en los artículos 4º, 5º y 6º, se considerará la antigüedad en la función judicial como equivalente al ejercicio de la profesión de abogado. No requerirán nuevo nombramiento los magistrados cuya denominación o competencia actual cambie en virtud de esta ley.

Art. 127. — El Boletín Judicial y el personal afectado al mismo dependerán del Poder Ejecutivo.

Art. 128. — Esta ley entrará en vigencia a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial.

La Corte Suprema adoptará las providencias necesarias para que a esa fecha puedan funcionar los tribunales nacionales con su nueva organización.

Art. 129. — Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 130. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Belisario Gache Pirán.

**Sr. Presidente.** — En consideración.

**Sr. Basaldúa.** — Pido la palabra.

Este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, de organización de la justicia nacional, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, viene en revisión al Honorable Senado.

Son muchas las razones y conveniencias que aconsejan no demorar estas modificaciones estructurales, en gran parte consecuencia de la reforma constitucional de 1949, que concretarán

un nuevo ordenamiento judicial tendiente a perfeccionar la administración de justicia.

La vieja Constitución de 1853 estatua que «el Poder Judicial de la Confederación, será ejercido por una Corte Suprema de Justicia de nueve jueces y dos fiscales, que residirán en la Capital, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso establecerá en el territorio de la Confederación» (artículo 91).

Fué la Convención de la provincia de Buenos Aires que en la revisión de 1860, modificando aquel artículo, que pasó a ser 94, mantuvo el principio de que «el Poder Judicial de la Nación será ejercido por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciese en el territorio de la Nación...», agregando que corresponde a ellos (artículo 100) el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación; con la reserva del inciso 11, del artículo 67, cláusula esta última que daba al Congreso el poder de dictar los códigos comunes.

De estos preceptos surge claramente que la justicia nacional fué creada en distinción de la justicia de las provincias, para aplicar tanto la Constitución Nacional como las leyes de la Nación, y, entre éstas, por cierto, los códigos comunes que tienen eminentemente el carácter de leyes de la Nación.

En cumplimiento de aquella disposición constitucional, se dictó la ley 27 de 1862, la que fijaba el número de miembros de la Corte Suprema, al par que establecía los juzgados unipersonales de sección, a razón de uno por cada provincia, como mínimo. Esta fué modificada por otras posteriores que crearon nuevos órganos y formularon adecuada distribución, leyes 27, 43, 48, 927, 935, 1.467, 4.055, etcétera. Pero, hasta entonces, no había problema y, por el contrario, los criterios de los legisladores eran bien claros en el sentido de que la función judicial es una emanación de la soberanía bajo nuestro régimen federativo, dentro del cual no podía haber más que dos clases de justicia: una nacional, y otra provincial. Y así ya lo entendieron los legisladores en 1858, al sancionar, con ligeras modificaciones, el proyecto enviado por el presidente, capitán general Urquiza, que atribuía: «... a los jueces del territorio federalizado —entonces toda la provincia de Entre Ríos— la jurisdicción federal y la ordinaria de provincia».

Así lo han entendido también los americanos del Norte, que con preceptos constitucionales semejantes a los nuestros organizaron la justicia del distrito de Columbia, otorgando a los jueces amplia jurisdicción para entender en los asuntos del fuero común y en los del fuero llamado federal.

El problema reconoce su origen y está íntimamente ligado a nuestra cuestión capital,

de larga y difícil gestación, que recién tuvo solución en 1880 por el convenio con la provincia de Buenos Aires. Al sancionarse la ley 1.029, que federalizó el territorio de la Capital de la República, hubo necesidad de proveerlo de autoridades que habían de substituir a los funcionarios provinciales, y a ese efecto el Poder Ejecutivo de la Nación proyectó la ley orgánica de los tribunales, que luego, el 15 de diciembre de 1881, fué sancionada bajo el número 1.144.

Esta fué la que creó el primer tribunal federal para la Capital de la República, al tiempo que conservaba la ordinaria, o sea la común de la provincia, para la Capital.

La explicación de la creación de este sistema mixto ha sido brillantemente abordada por el miembro informante de la Comisión Especial Redactora de los Códigos de Procedimientos Civil, Comercial y Criminal y de Organización de los Tribunales, de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Antonio J. Benítez, atribuyéndola a un temperamento de emergencia que quiso evitar dificultades más graves en el momento político de su sanción.

Y así fué como imperó y continuó acentuándose esta distinción artificiosa, que se hizo más notable al adoptarse para la justicia ordinaria el Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires, en el año 1881, en lugar de adoptar el procedimiento de aquellos tribunales a la ley 50, que era la ley, precisamente, de procedimientos federales.

La ley orgánica que lleva el número 1893 fué la que marcó la distinción más neta, entrando ya de lleno a organizar la justicia ordinaria de la Capital, y fué tan estable que se ha mantenido hasta ahora con algunas modificaciones.

Esta dualidad de fueros es perfectamente explicable en los países en que rige un sistema federal de gobierno, pero bien entendido que ello sólo en los lugares en que la Nación no ejerce función jurisdiccional ordinaria, porque, precisamente, debido a que la justicia local pertenece a los Estados particulares —provincias—, es que la federal tiene razón de ser.

La jurisdicción es la potestad de administrar justicia; es una atribución esencial de la soberanía, de la cual emana, y es, por la forma federal de gobierno que nos rige, que no puede haber más que dos clases de jurisdicción: la federal, que emana de la Nación, y la provincial, que emana de las provincias.

En virtud de este principio jurídico, cuando los jueces de la Nación ejercen sus funciones en territorios sometidos exclusivamente a la jurisdicción nacional, son jueces ordinarios de la Constitución, investidos de la suma del Poder Judicial, y pueden, en principio, conocer en todos los asuntos, sin excepción.

Pero sólo la revolución justicialista fué la que encaró el problema, en el afán de que los principios constitucionales se interpreten con la mayor autenticidad. Por eso, esta estructuración que ahora se proyecta para la justicia nacional, en ejecución del Plan Quinquenal de 1946, en su capítulo referente a la reorganización de la justicia federal, destaca la opinión casi unánime de los tratadistas en el sentido de la unificación propuesta. Después de expresar que la justicia federal es una sola para todo el territorio de la Nación, establece bases a las cuales responde esta organización de la justicia nacional, y deja a salvo también que existirá «una relación de dependencia jerárquica que no implica la modificación de las instancias actuales», principio éste que se ha tenido en cuenta en el proyecto propuesto. Las distintas bases que llegan al número 19 prevén las condiciones de ingreso a la carrera judicial, los ascensos, etcétera, que, como se verá más adelante, han sido tenidos muy en cuenta en el proyecto.

Otro antecedente importante que se ha tenido muy en cuenta es el proyecto presentado por el ex senador doctor Julio Herrera, que, como presidente de esta comisión, tuvo el honor de informar en la sesión del 20 de agosto de 1948, y que la Honorable Cámara sancionó. Ahí también se lograba la unificación, dándose la denominación de «Jueces Federales de la ciudad de Buenos Aires», pero se mantenía la división de «Jueces Federales de los Territorios Nacionales». No obstante la correcta técnica con que fué elaborado este proyecto por tan distinguido jurista, quedó sólo con media sanción. Era en ese momento una avanzada que no pudo llegar a concretarse porque aun faltaba la concurrencia de otras circunstancias que se produjeron posteriormente, y que más adelante analizaré.

Hoy, con la nueva constitución justicialista sancionada por la Honorable Convención Nacional Constituyente el 11 de marzo de 1949, se abre la brecha que permite a los poderes públicos encarar a fondo el problema y realizar la nueva estructuración del Poder Judicial de la Nación.

Como innovación trajo el principio de que los tribunales inferiores serán juzgados y removidos en la forma que determine una ley especial (artículo 91), y esa ley, que ya fué dada por el Poder Legislativo en el período anterior, establece que en tales casos lo serán por los propios miembros del Poder Judicial.

Como principio correlativo, también dispone la Constitución que la Corte Suprema ejercerá superintendencia sobre los jueces y tribunales que integran la justicia de la Nación (artículo 94), y esta superintendencia no es otra que la dirección superior de todos los tribunales nacionales inferiores que en forma imperativa se acuerda al tribunal máximo.



Por último, con toda claridad establece que «en la Capital de la República todos los tribunales tienen el mismo carácter nacional» (artículo 94). Estos principios convertidos en preceptos constitucionales son los que han permitido llegar a la tan ansiada unificación de la justicia nacional y por sobre todo darle la autonomía necesaria como poder del Estado, sin dejar, por cierto, de ser una parte importantísima del gobierno de la Nación.

Ha llegado nuestro movimiento revolucionario, pues, al logro de uno de sus grandes fines, restableciendo el verdadero sentido de la unidad nacional. Con este proyecto convertido en ley se llegará a esa unidad jurisdiccional que emana de la Constitución y de nuestra forma republicana federal de gobierno. Se respeta, a la par, la diversificación en cuanto a la competencia, que también es tan trascendental porque obedece a la complejidad de la vida moderna.

Con estos antecedentes, el Poder Ejecutivo elaboró el proyecto que tuvo entrada en la Honorable Cámara de Diputados en agosto de 1949. Y sobre la base de ese proyecto, con algunas modificaciones, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación ha sancionado, el 15 de septiembre de 1950, el que viene en revisión a este honorable cuerpo.

Vuestra Comisión de Justicia, Honorable Senado, le presta el más franco apoyo, y salvo algunas enmiendas que se señalarán, aconseja su aprobación.

El proyecto que se trata comienza por establecer lo que puede llamarse el estatuto del magistrado. Determina la forma de constitución del Poder Judicial, a la que da el carácter, conforme con los principios a que me he referido, de jueces nacionales.

En su artículo segundo, después de establecer la forma de su nombramiento fija, conforme con las normas constitucionales, su retribución, la que no podrá ser disminuída, determinando que aquélla será uniforme para todos los jueces de una misma instancia, cualquiera sea el lugar donde desempeñe sus funciones, norma de indudable acierto que viene a corregir las anomalías en que se encontraban los jueces del interior del país que, realizando una misma función, percibían menor retribución. Igual norma se aplica para todos los funcionarios y empleados de la justicia federal.

Refirma luego el principio constitucional de la inamovilidad de los magistrados, las condiciones para su nombramiento e incompatibilidades para el desempeño de sus cargos. Y es así como establece que la magistratura judicial es incompatible con toda actividad de proselitismo político, ejercicio del comercio y la realización de cualquier actividad profesional. Cabe destacar que se autoriza a los magistrados el

ejercicio de la docencia, y la comisión entiende que esto es en un sentido amplio, que comprende también a los jefes de trabajos prácticos de las facultades. Entiende asimismo el senador que habla que la prohibición que establece el artículo 99 in fine debe ser interpretada conforme con las normas establecidas en el artículo 14 de la ley de enjuiciamiento de los magistrados.

Se establece en el artículo 10 que los jueces deben residir en la ciudad en que ejercen sus funciones o dentro de un radio hasta de 40 kilómetros de la misma, dejando librado a la Corte Suprema la facultad de autorizar a los mismos para residir a una mayor distancia.

En los artículos 12 a 16 se da la norma para los funcionarios y empleados de la administración de justicia estableciendo las condiciones para su nombramiento.

La comisión ha creído conveniente hacer accesibles al cargo de secretario o prosecretario a los escribanos graduados en universidad nacional, tanto porque la función de actuario es propia de esa especialidad, como para no cortar la carrera judicial a quienes tienen tal título que luego pueden mejorar.

Se faculta a la Corte Suprema de Justicia para nombrar, remover y decidir sobre toda cuestión vinculada con el personal de la justicia, imponiéndosele en esta forma la jefatura del Poder Judicial y con un desempeño análogo al del Poder Ejecutivo con respecto a la administración nacional.

Consagra la estabilidad de los funcionarios y empleados judiciales, los que no podrán ser removidos sino por causas de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con audiencia del interesado.

Determina asimismo que la Corte Suprema acordará un escalafón que asegure la estabilidad y el ascenso en la carrera conforme con sus aptitudes, eficiencia, antigüedad, etcétera.

En los artículos 17 a 19 se legisla sobre las sanciones disciplinarias aplicables por falta de los funcionarios, empleados y demás auxiliares de justicia, así como también las que podrán aplicar los tribunales colegiados y jueces a los abogados, procuradores, litigantes, etcétera, por falta que cometieren contra su dignidad o decoro en las audiencias o escritos o contra su autoridad u obstruyendo el curso de la justicia.

Esta comisión propone un aditamento al artículo 17 en el sentido de que las cámaras y los jueces pueden imponer sanciones disciplinarias a su personal, dando cuenta inmediata a la Corte Suprema. Con ello se ha querido refirmar la autoridad de los magistrados cuidadores del orden dentro de su tribunal.

Se legisla en el artículo 20 sobre el auxilio debido por las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo nacional y provincial para el

cumplimiento de las diligencias judiciales. Esta comisión suprime la última parte del artículo 20, en razón de que las medidas a que se refiere estarían involucradas en la primera parte y que su ejecución estaría siempre condicionada al trámite de la rogatoria.

En capítulo especial se legisla sobre la composición de la Corte Suprema de Justicia, su integración en caso de impedimento de los miembros, y con respecto al régimen actual ofrece una modificación estableciendo que la misma se integrará por sorteo con los presidentes de las cámaras nacionales de apelaciones y no con conjuces.

Trata luego de la materia en que debe conocer, enumerando taxativamente las cuestiones que se refieren a su jurisdicción y competencia.

Se dictan normas comunes para todas las cámaras nacionales de apelaciones de la República, dándose las normas sobre integración, forma de voto, decisiones de los tribunales plenarios, etcétera.

Trata el artículo 32 sobre los tribunales nacionales en la Capital Federal, los que estarán integrados: 1) Por las cámaras nacionales de apelación en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contenciosoadministrativo; en lo Civil, en lo Comercial, en lo Penal, del Trabajo y de Paz. 2) Por jueces nacionales de primera instancia en lo Civil y Comercial Especial, en lo Penal Especial y en lo Contenciosoadministrativo; en lo Civil, en lo Comercial, en lo Penal de Sentencia, de Instrucción y Correccional, del Trabajo y de Paz.

El artículo 33 trata de la competencia de las cámaras nacionales de apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contenciosoadministrativo, la que será tribunal de alzada de los juzgados correlativos. «Conocerá asimismo de los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los órganos administrativos, en los casos autorizados por las leyes y contra las resoluciones del jefe de la Policía Federal, en materia de derecho de reunión.»

Con respecto a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, el artículo 35 establece que las dos cámaras actuales constituirán un solo tribunal.

Los artículos 36 y 37 tratan sobre la constitución de las Cámaras en lo Comercial y en lo Penal de la Capital Federal.

Por el artículo 38 se crea, bajo la dependencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal, la Oficina de Servicio Auxiliar, la que deberá colaborar con los jueces de instrucción y en lo Penal Especial, para lograr así la substanciación más rápida de las causas que por su naturaleza o complejidad no puedan atenderse eficazmente con el personal de los juzgados.

Por el artículo 39 se eleva a doce los miembros de la actual Cámara de Apelaciones del

Trabajo, teniendo en cuenta la acumulación enorme de causa que tiene dicho fuero.

Los artículos 41 a 45 legislan sobre la competencia de los jueces nacionales de primera instancia en lo civil y comercial especial, en lo penal especial y en lo contenciosoadministrativo. Al respecto, debo destacar que los actuales juzgados federales en lo criminal y correccional de la Capital, números 1 y 2, se denominarán Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Especial de la Capital Federal, conservando su actual competencia, salvo aquella que le está atribuida por razón de lugar, o de esta ley, a otro tribunal.

Con las prescripciones del artículo 34 se salvan los inconvenientes que se suelen presentar por procesos paralelos que obstruyen y dilatan los mismos. Es decir, que en esta forma se obtiene una mejor y más rápida justicia, al atribuir la substanciación y terminación de esos procesos ante un solo tribunal.

Pero lo más interesante es la competencia que atribuye a los juzgados de primera instancia en lo contenciosoadministrativo, pues por el artículo 45 les da el carácter verdadero de la materia contenciosoadministrativa, fijando así una base firme de la especialidad, tal como lo hizo notar mi colega el doctor Ramella al informar el despacho de la que luego fué la ley 12.967.

Se ha suprimido también, la última parte del artículo 46, en razón de que el precepto que contiene resultaría inoperante ahora, ya que cuando el Poder Ejecutivo formuló este proyecto aun no se había sancionado la ley que derogó los juzgados de familia, únicos que obedecían a distribución por especialidades.

Por el artículo 47 se aumenta con diez jueces más los juzgados de Trabajo, en razón del cúmulo de juicio que se tramita en ellos, dando al mismo tiempo fuerza legal en lo referente a los asuntos en que sea parte la Nación, sus reparticiones autárquicas o la Municipalidad, lo que ya había sido establecido por la jurisprudencia.

Al aumentarse la competencia de los Juzgados Nacionales de Paz de la Capital Federal, no se ha hecho más que responder a la gran evolución de los valores económicos y a la elevación del standard de vida operado a raíz del movimiento justicialista.

Se atrae así una mayor cantidad de causas a estos juzgados, beneficiando en esa forma a la clase trabajadora, con el menor costo del sellado y con un procedimiento más rápido.

Se establece con respecto a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de la Capital Federal, que la actual Oficina, organizada por decreto número 25.559, de 1948, tendrá a su cargo la diligencia de los mandamientos y notificaciones de los tribunales nacionales, y atri-

buye a la Corte Suprema la superintendencia sobre la misma.

Pasa luego a legislar sobre los tribunales con asiento en las provincias y territorios, fijando con claridad y certeza su jurisdicción y competencia, creando, además, un juzgado de primera instancia en la gobernación Marítima de Tierra del Fuego, con jurisdicción en ella, en las islas Malvinas y en la Zona Antártida Argentina, refirmando así, una vez más, la soberanía argentina sobre estos territorios.

Establece un régimen uniforme en el artículo 58 para la Justicia de Paz de los Territorios acondicionándola a los principios establecidos en el proyecto que tratamos, y terminando así con las diversas leyes y disposiciones dispersas, que establecían variados regímenes.

En los artículos 59 y 72 se legisla sobre los cuerpos técnicos periciales, y peritos auxiliares, formando un cuerpo armónico, sometidos a reglas uniformes que hasta ahora no han tenido.

La Comisión de Justicia le ha adicionado al artículo 61 la indicación de la sede que tendrán los cuerpos técnicos en provincias y territorios nacionales.

Al artículo 63 se le ha formulado la aclaración de que la designación del decano de los cuerpos técnicos se refiere a los cuerpos técnicos de la Capital Federal.

En el segundo párrafo del artículo 78, se suprime a los escribanos en razón de que, por el artículo 12, ya se resuelve como habilitante su título para el desempeño del cargo de secretario o prosecretario.

La supresión del artículo 82, comprendido en el capítulo de las disposiciones transitorias, obedece a las previsiones del Plan Quinquenal, en virtud del cual el Poder Ejecutivo de la Nación está elaborando un proyecto de ley de organización de los ministerios públicos, por lo cual no urge por el momento legislación alguna al respecto.

Por estas consideraciones, y en nombre de la Comisión de Justicia que presido, solicito al Honorable Cuerpo, apruebe este proyecto que sin duda alguna, llenará una sentida necesidad en la vida jurídica de la Nación.

**Sr. Madariaga.** — Pido la palabra.

Señor presidente: Esta es una ley de profunda historia revolucionaria y de magnífica significación reparadora y justicialista. El pueblo argentino, desde hace muchos años, reclama justicia dentro del Poder Judicial. Las masas populares de nuestros días también esperaban la recuperación total de la justicia nacional.

Esta es la consagración legislativa de la doctrina peronista en materia de ordenamiento judicial, y por tanto, creo de mi deber recordar algunos antecedentes revolucionarios y ponderar

los postulados del general Perón en lo tocante a la reforma de la justicia.

Enjuiciada y depuesta la corte del fraude, y renovadas las magistraturas en todo el país, faltaba una reorganización total de la justicia argentina y la correspondiente ejecución de la nueva ley en la reestructuración del personal judicial, en todas las jerarquías, como se establece en el artículo 85 de esta ley.

Para demostrar estas afirmaciones, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista netamente peronista, voy a decir algunas palabras.

Y las voy a decir llamando a las cosas por sus nombres verdaderos, y hablando para el pueblo, no para los doctores.

Todos los señores senadores que pertenecieron al radicalismo tradicional, no al contubernismo, saben muy bien que el planteamiento revolucionario de la reorganización total, absoluta e integral del Poder Judicial de la Nación y de las catorce provincias, fué básico en lo que debió haberse ejecutado, y no se ejecutó, desde 1916 en adelante. Los manifiestos y documentos más famosos anteriores a 1916 así lo preanunciaron.

Como en tantas otras esferas de la reparación nacional, en la justicia, quedamos como estábamos en 1916, y así llegamos después a 1922, 1928 y a 1930, para seguir igual, y aun peor, después de la caída del pueblo argentino en la era del fraude y la violencia, que terminó en 1943 mediante la acción de las fuerzas armadas de la Nación.

Para demostrar que no se cumplió el postulado de la reorganización total del Poder Judicial de la Nación en 1916, ni después, solamente deseo citar un par de párrafos de mensajes del presidente Yrigoyen al Congreso Federal, sobre el Poder Judicial, mensajes cuyos anhelos no pasaron jamás de la noble inquietud del presidente Yrigoyen, porque los diputados y senadores nunca se dieron a la tremenda labor de ejecutar la revolución, ni de ajusticiar a la fraudulenta organización judicial de toda la República, que fué desde 1890 en adelante, una misma orientación oligárquica y entreguista. Todas las luchas de Yrigoyen y de las masas populares se vieron siempre defraudadas por los diputados y senadores del Congreso Federal, porque no hubo, real ni moralmente, el empuje revolucionario y la valentía para imponerla, como fué la voluntad nacional y como fué el planteamiento popular desde sus orígenes.

Decía Yrigoyen en diferentes mensajes, concretando su pensamiento sobre la justicia: «Convencido el Poder Ejecutivo de que así como deben ser buenas las leyes, deben también ser buenos y honestos los jueces, será su principal preocupación de gobierno enaltecer la justicia, rodeándola de los altos prestigios de que debe estar revestida, a fin de que pueda llenar cum-»

plidamente sus delicadas funciones, dado el concepto moral que corresponde a la trascendencia de su misión y al significado de sus responsabilidades.

«El Poder Ejecutivo —agregaba— concordante con los propósitos reiteradamente expresados de que la justicia debe estar revestida de todos los prestigios inherentes a su augusta misión, ha procurado, desde el primer momento de su ejercicio, encomendar tan delicadas tareas y funciones a hombres de estudio notoriamente capacitados, promoviendo dentro de la escala judicial a los más meritorios y llevando, a la vez, a ciudadanos de reconocida honorabilidad y de indudable versación jurídica, a la función judicial. La administración de la justicia debe ser sabia, recta y rápida, condiciones indispensables para que ella sea la verdadera garantía de la vida, del honor y del patrimonio de los habitantes del país, sin distinción de jerarquía social.

«El prestigio y el buen nombre de la justicia, sin duda, depende no tanto de la sabiduría de las leyes cuanto de las calidades y altas virtudes de que deben estar revestidos los encargados de administrar la justicia en todo el país.

«Afianzar la justicia —terminaba— es el primer postulado de nuestra Carta Fundamental después de constituida la Nación, y a ese alto propósito ha concurrido siempre el actual Poder Ejecutivo, enalteciéndola y siguiendo la norma ya señalada de que así como deben ser buenas las leyes deben también ser buenos los jueces.»

Estos conceptos de hace 35 años, incumplidos en los estrados de la justicia porque la reorganización total y general jamás fué intentada siquiera por los hombres que explotaron los prestigios populares de Yrigoyen; estos conceptos esclarecidos del soñador, no fueron compartidos ni creídos por los legisladores de su tiempo, ni por los jueces de su época. El viejo sistema oligárquico, falaz y descreído, siguió imperando en la organización de la justicia y en la formación de sus cuadros de jueces y subalternos. Nosotros podemos dar cumplida referencia de tales verdades como ciudadanos que luchamos por tan altos ideales y propugnamos tan elevadas y profundas reformas a la vez, y como soldados de una causa patriótica que fué malograda en los oficialismos y en las trastiendas parlamentarias, sin penas ni glorias, en la permanente defraudación al claro verbo de la voluntad nacional.

La justicia no fué reorganizada integralmente, ni siquiera parcialmente como indicara el presidente Yrigoyen. Los jueces fueron y continuaron los mismos de la era del descreimiento y del régimen abatido en las jornadas de 1916. Esos mismos jueces lo procesaron después al moralista Yrigoyen, para juzgar en su an-

ciudad austera y romántica los conceptos medulares de sus mensajes incomprendidos de otros tiempos. Yo puedo afirmar ahora, 30 años después de las palabras y de los mensajes del señor Yrigoyen, juzgado por aquellos jueces, que sus sueños solamente fueron sueños hasta que la revolución de junio y la revolución popular del 17 de octubre pusieron definitivamente el cumplimiento a todas las esperanzas populares contenidas y negadas por los legisladores y por los jueces anteriores, y durante todos los gobiernos conservadores y radicales que se sucedieron desde 1880 en adelante, sin solución de continuidad, en lo tocante a la revolución dentro de la justicia misma.

Puedo afirmar, también, rotundamente, a la luz de la conocida historia de los últimos 40 años, que todos nosotros hemos hecho y hemos vivido, —porque como muy verídicamente dice Marañón: «el hombre es el que hace la historia, aunque la mujer es la madre del hombre...»— puedo afirmar, repito, que nunca se hizo lo que se hizo y se está haciendo ahora en materia de justicia y de reorganización del Poder Judicial; tal como se realiza ahora, bajo el gobierno revolucionario, constructivo e ilustre del señor general Perón.

Si volvemos a leer aquel famoso mensaje del mismo Yrigoyen sobre la intransigencia moral, nadie dudará siquiera de que todo fué un sueño desvanecido en oficialismos descreídos. Por eso fué solamente una mera expresión de moral política lo que Yrigoyen dijo cuando escribió las siguientes palabras: «Así como en el retroceso y sobre el contraste mismo levantamos los cimientos fundamentales que habrán de sustentar una nueva era de creaciones re-constructivas en todos los órdenes —morales, políticos y sociales—, así también en el gobierno y sobre el desastre y sus crisis extremas, hemos afianzado las bases de los renacimientos generales. Pero, para su eficacia verdadera, será necesario no transigir con nada de lo que fué justamente condenado; ni abdicar de nada de lo que fué legítimamente sancionado por la voluntad nacional».

La vieja doctrina moral de la intransigencia fué la que proclamara Yrigoyen, pero no cumplida por sus contemporáneos y sucesores en los gobiernos del oprobio oligárquico, hasta 1943.

Fué clarísima la posición del luchador cuando fijó el concepto en el manifiesto de la revolución de 1905, del modo siguiente: «Entre el último día del oprobio y el primero del digno despertar, debe de haber una solución de continuidad, una claridad radiante, que lo anuncie al mundo y lo fije eternamente en la historia. Esperar la regeneración del país —agregaba— de los mismos que lo han corrompido; pensar que tan magna tarea pueda ser la obra

de los gobiernos actuales de la República y de la presidencia surgida de su seno. —se refería al régimen—, sería sellar ante la historia y sancionar ante el mundo 25 años de vergüenza con una infamación, haciendo del delito un factor reparador y el medio único de redimir el presente y salvar el futuro de la Nación».

Esta memorable condenación fué firmada el 4 de febrero de 1905 por los ciudadanos que constituyeron la Junta Nacional Revolucionaria: Hipólito Yrigoyen, presidente honorario; Pedro C. Molina, presidente; José Camilo Crotto, vicepresidente; Vicente C. Gallo y Pablo A. Schickendants, secretarios. Los señores senadores, que han tenido la responsabilidad y el insigne honor de ser jueces de los jueces de aquella Corte Suprema y dejar sin confirmación constitucional a muchos magistrados que no llenaban las condiciones exigidas, como quería Yrigoyen hace 40 años, son testigos de la verdad que yo afirmo.

Por eso, hoy día, cuando el Congreso Federal considera esta nueva ley, a la que el Senado de la Nación está por darle sanción definitiva, he querido recordar todas las etapas recorridas para alcanzar semejante consagración de ideales argentinos y populares no cumplidos por los gobiernos que fueron elegidos para poner punto final a la ignominia y para «no transigir con nada de lo que fué justamente condenado, ni abdicar de nada de lo que fué legítimamente sancionado por la voluntad nacional».

La reorganización integral y total del Poder Judicial, en su legislación orgánica y en su personal, con serena tolerancia y conceptuosa magnanimidad, será el cumplimiento de lejanos y cercanos ideales del pueblo argentino, que no ha tenido mejor ejecutor de su soberana voluntad nacional que el presidente Perón, el hombre verdadera y absolutamente intransigente en el impertérrito cumplimiento de los deberes constitucionales y morales con relación a la justicia y a los jueces.

La revolución de junio y las masas populares del 17 de octubre del 45, bajo el signo de Perón, nos ofrecieron el maravilloso espectáculo de la «radiante claridad» entre el último día del oprobio y el primero del digno despertar, entre los que fueron gobiernos del fraude oligárquico y el gobierno verdadero de la Nación por la soberana voluntad de su pueblo en comienzos libres y honorables.

La tarea de redimir a la Nación y de enjuiciar a la justicia de antaño requería el imperio de la voluntad nacional, el concurso de factores nuevos, una sólida cohesión moral y un sólido vínculo de civismo entre los actores del nuevo escenario nacional, así como la suprema dirección de un conductor recio y firme en la ejecución de su propia empresa y en la perfección de su propia línea. Y el pueblo argentino consagró al señor coronel Perón.

Estoy también persuadido, desde algunos años, de que la Nación, en las urnas del 46, encontró al único ciudadano que tenía la voluntad inquebrantable y el ensueño de poner a la República bajo nuevas instituciones, tal como nosotros hemos querido de modo claro y concreto, según los manifiestos y los famosos documentos que todos los señores senadores conocen porque saben la historia desde 1890 hasta 1930.

Esta empresa nunca pudieron imaginarla los mediocres ni alcanzarla los pigmeos, como el mismo Yrigoyen dejara escrito en la revista «Proteo» hace 35 años. Yo tengo el honor de formar entre los soldados que venimos sosteniéndola desde la juventud lejana sin ninguna desviación siquiera en las ciudades y en los campos; y ahora me encuentro entre los que van a sancionarla con sus votos en el más alto cuerpo legislativo de la República, en cumplimiento del programa peronista de recuperación nacionalista y de reconstrucción total de las instituciones argentinas.

Es una satisfacción honesta y legítima que cada uno de los señores senadores sienten también en el corazón de luchadores y de románticos ciudadanos de la revolución peronista.

Por esa razón he recordado viejas esperanzas y lejanas palabras incumplidas, pero siempre luminosas en las rutas de la patria nueva, como decía el tribuno de las plebes, don Leandro N. Alem. Y para ofrecer a la opinión pública la razón de la autoridad profesional con que digo estas palabras repetiré que nunca he transigido con la justicia fraudulenta ni he abdicado de la voluntad de removerla, porque yo soy de los que cumplieron en absoluto los postulados de Yrigoyen y cumplo la doctrina peronista en su total amplitud.

Reorganizarla desde los orígenes legales y hasta los últimos estrados, fué un imperativo revolucionario a cuyo servicio nos consagramos impertérritamente; y lo hemos logrado gracias a Perón y a la doctrina peronista sobre la justicia argentina. ¡Teníamos que lograrlo!

Desde luego, la doctrina peronista no es de meras palabras ni de ensueños azules. Aquí la justicia es un concepto humano y radicalmente revolucionario, cuando la doctrina peronista declara: «Busquemos una justicia retributiva y opondremos una energía inexorable a la explotación del hombre por el hombre.»

Estamos ya, señor presidente, sobre la nueva humanidad, y sentimos que el imperio de la verdad está cercano en la tierra de los argentinos, por el ideal peronista y por la voluntad de ejecución del creador de la doctrina, que nosotros cumplimos como podemos y como debemos en el Poder Legislativo federal de la Nación Argentina.

Hacer la justicia, y que las masas populares no vuelvan a ser engañadas ni sometidas por la fuerza, es hacerles justicia.

Bien ha dicho el señor general Perón en la doctrina peronista: «Es muy triste el mundo de la injusticia para obligar a los hombres a vivir en él. El gobierno que no sea capaz de hacer justicia social no es gobierno, sino un mecanismo destinado a favorecer a los siempre favorecidos, y elegidos también por los siempre favorecidos, porque las masas argentinas que hoy día agradecen la justicia nueva, que con tanto retardo les llega, dentro del viciado régimen democrático anterior, no elegían sus gobiernos, aun cuando se les daba el engaño y la simulación del voto en los comicios.»

Sobre estos fundamentos, tan sólidos como claros, el idealismo peronista es la justicia social, antes que la justicia del Poder Judicial. Nuestra empresa justicialista abraza mucho más, hacia arriba y hacia abajo, que la vieja concepción tribunalcia de la justicia.

De allí el concepto peronista de la justicia que se expresa con las bellas palabras siguientes: «En esa tarea del Estado, *hacer justicia*, dice el general Perón, debe tenerse en cuenta que el derecho ha de responder a la realidad social de la hora presente, para que sus normas contribuyan a mantener el equilibrio de intereses que se deriva, lógicamente, del concepto de Justicia.» Pero, ¿qué es la justicia social? el «problema social» fué y es tan viejo como la humanidad misma. Se designa bajo el nombre de «problema social» el conjunto de cuestiones que la sociedad tiene que resolver en el orden económico, como son las siguientes: la cuestión entre propietarios y no propietarios; la cuestión entre los capitalistas y los proletarios; la cuestión entre los patronos y los obreros. Resumiendo, se puede afirmar que el problema social es el eterno y siempre candente problema de los ricos y de los pobres. Y este asunto, complejo y bravo, existió en los pueblos de la antigüedad, en Atenas, en Roma, en la Edad Media, en Europa, Asia, Africa, Oceanía y América. Se dijo que es de todos los tiempos y de todos los países. En nuestro propio suelo el problema social era agudo y crítico al advenimiento de la era de Perón.

A ponerle término de algún modo vino la justicia social en la doctrina y en la legislación universal. A darles soluciones adecuadas, y argentinas, como ejemplo para el exterior, mediato e inmediato, vino la doctrina peronista del justicialismo, impresa en la Constitución y en las leyes de Perón. Nuestra justicia social, de tal modo, equivale, matemáticamente, a las definiciones del buen ordenamiento social, del equilibrio social, de la solidaridad social, de la democracia cristiana y humanista, proclamada, con insuperable elocuencia, por el general Perón.

Tenemos, para los argentinos de hoy y del futuro, que la justicia social es la virtud que regula los actos individuales y colectivos para la creación y la conservación del bien común,

sin excluir indebidamente a nadie que contribuya lealmente en la labor nacional, de la participación que legítimamente le corresponde en la producción y consumo de los bienes.

A tal fin, constitucionalmente, conducen las tres funciones específicas de lo que es el Estado o, más sencillamente, la autoridad; la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial.

De allí, lógicamente, esta vinculación directa de la justicia social con la función judicial de la autoridad del Estado, de cuya organización y funcionamiento plenamente constitucional, justicialista y revolucionario, trata la ley que vamos a sancionar.

Esta ley es una de las leyes básicas del glorioso movimiento nacional del Partido Peronista, y hay que decirlo para que las masas populares sepan muy bien por qué y para qué la sancionamos.

Muchos hablaron y hablan aún, en la doctrina, en la tribuna, en el periodismo, de la llamada «separación de los poderes», con intencionada suspicacia.

Podría enumerar, señor presidente, las opiniones de tratadistas eminentes de todo el mundo sobre esta materia, pero me basta y sobra con la del maestro en boga entre los estudiantes y los estudiosos, el profesor Kelsen, en cuya magistral obra *Teoría general del Derecho y del Estado*, páginas 286 y 287, se lee lo siguiente: «Separación del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo (administración): a) Naturaleza de la función judicial. La separación del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo sólo es posible en una medida relativamente limitada. La separación estricta de los dos poderes es impracticable, puesto que los dos tipos de actividades, usualmente designados por esos términos, no implican funciones esencialmente distintas. La función judicial —continúa el maestro— es de hecho ejecutiva, exactamente en el mismo sentido que la función que ordinariamente se designa con tal palabra (ejecutiva).» La función ejecutiva, a su vez, consiste en la ejecución de normas generales. ¿Qué especie particular de las normas generales es llamada «judicial»? La cuestión solamente puede ser respondida por medio de una descripción de las actividades típicas de los tribunales civiles y penales; continúa Kelsen. «La función judicial consiste, esencialmente, en dos actos: a) El tribunal establece la existencia de un hecho calificado como acto antijurídico, civil o penal, por una norma general aplicable al propio caso: b) El tribunal ordena una sanción civil o penal estipulada en forma general por la norma que ha de aplicarse. El procedimiento judicial tiene, usualmente, la forma de una controversia entre dos partes. Una de ellas pretende que el derecho ha sido violado por la otra, o que ésta es responsable

de una violación jurídica cometida por otro individuo, y la parte contraria niega que éste sea el caso. La sentencia judicial —termina el profesor Kelsen— es la solución de una controversia.»

Pues bien, nuestra doctrina y la voluntad nacional que nosotros interpretamos, representamos y ejecutamos bajo la dirección suprema del general Perón, se define en esta materia de la función judicial como la justicia igual para el pobre y para el rico, no la justicia oligárquica de antaño.

Y debe existir identidad entre el Poder Judicial y los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación, porque esa es la voluntad nacional.

La reorganización integral de la justicia argentina, que será por siempre una de las glorias del gobierno de Perón en la historia del futuro, comienza, como muy bien lo ha dicho el señor senador por el Estado de Entre Ríos, doctor Basaldúa, en la reforma constitucional de 1949, para alcanzar, en esta nueva ley del Poder Judicial, su completa realización.

El magistral discurso del señor diputado doctor Benítez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara, nos dió los fundamentos y toda la información necesarios para sancionar el proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación. Y del debate amplio y conceptuoso, sin duda alguna, que se hizo en la Cámara de Diputados, surgen las razones más completas para que los senadores podamos confirmar la votación de la otra rama del Poder Legislativo.

Sin embargo, la Comisión de Justicia del Senado Federal estudió, desde la presentación del proyecto de ley, las disposiciones que el Poder Ejecutivo creyó oportuno someter a la consideración del Congreso.

Nosotros, en la Comisión de Justicia, también somos hombres de derecho y tenemos el sabio consejo del profesor de la Universidad del Litoral, senador por Santa Fe, doctor Antille, que completa la experiencia profesional del doctor Basaldúa, senador por Entre Ríos. Estudiamos y encontramos totalmente aceptable el notable proyecto del Poder Ejecutivo sancionado en la Cámara de Diputados, con el auspicio y el voto, diría unánime, de la representación popular de la Nación, con ligeras modificaciones al original, es cierto.

El largo debate de Diputados demostró la preparación del cuerpo para considerar el proyecto de ley y la erudición de sus miembros. La opinión pública y el periodismo conocen la verdad de estas afirmaciones y no pueden creer, en consecuencia, más que la verdad. Pero el profundo conocimiento que tiene el Senado con relación a las reformas judiciales, bien conoce también la opinión pública desde 1948, porque al estudiar y sancionar el proyecto de ley del distinguido jurista doctor Julio Herrera, entonces senador de la Nación por el Estado de Ca-

tamarca, esta sala demostró completa información sobre la materia. Además, todos los letrados que ocupan bancas en este recinto conocen muy de largo tiempo atrás, el viejo y retardado problema de la reforma judicial argentina, de manera que no es verdad lo que la prensa periódica dice en lo tocante a la celeridad y poca información con que se sancionan estas reformas, pues en la cátedra universitaria, en la doctrina y en la jurisprudencia hemos estudiado las necesarias modificaciones que ahora van a ser convertidas en ley nacional.

—Ocupa la Presidencia el presidente provisional del Honorable Senado, contraalmirante (R.) Alberto Teisaire.

En el plan de gobierno del excelentísimo señor presidente de la Nación, que todo el pueblo argentino conoce, desde su publicación y difusión en 1946 y 1947, la justicia está tratada con gran amplitud y claridad, en el tomo I, capítulo V, páginas 169 a 210 inclusive. El capítulo está dividido en las siguientes partes y materias: 1, justicia federal; 2, extensión del fuero del trabajo a la jurisdicción federal (creación revolucionaria); 3, notariado; 4, jurisdicción contencioso-administrativa.

El señor diputado presidente de la Comisión de Justicia y miembro informante del proyecto, doctor Benítez, dejó concretadas las cinco finalidades fundamentales de la reforma judicial, cuyos antecedentes constitucionales están expresados en la Constitución de Perón al unificar la justicia en el artículo 94, y al estatuir la organización y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia federal en los artículos 95 y 96.

También están establecidas esas finalidades en la exposición general del capítulo referido del plan de gobierno, como sigue, en los mensajes del presidente Perón, cuando el general dijo: «La independencia del Poder Judicial es requisito indispensable para la prosperidad de las naciones; pero la justicia además de independiente ha de ser eficaz, y no puede ser eficaz si sus conceptos no marchan al compás de los sentimientos públicos. La justicia en sus doctrinas ha de ser dinámica y no estática. El respeto al orden jurídico y al Poder Judicial no son incompatibles con la legislación que el gobierno promoverá para agilizar la actuación de los tribunales.

«Habrá de asegurarse también —continúa el general Perón—, mediante principios legales basados en razonables fundamentos objetivos, que los magistrados a quienes se ha encomendado la augusta función de juzgar, reúnan la plena idoneidad moral, física e intelectual que exige tan delicada tarea.» Esto es doctrina peronista.

Y fué con estos conceptuosos fundamentos presidenciales, propios del señor general Perón, que el Ministerio Secretaría de Justicia realizó



el plan general de revisión y adaptación a los principios contenidos en el pensamiento y en el plan de gobierno proyectando la ley que el Congreso Federal considera actualmente y que hoy tendrá sanción en este Senado.

La sola enunciación de las materias y el largo tiempo que se empleó en el estudio del proyecto desde 1946, confirman lo que he dicho en cuanto a la capacidad con que se abordan estas cuestiones fundamentales para el país.

La ley de organización de la justicia nacional se funda en las finalidades del plan de gobierno, reiteradas una vez más del modo siguiente y de acuerdo con el miembro informante de la otra Cámara también: «a) Normas de organización y funcionamiento uniforme para toda la justicia nacional del país, substituyendo las disposiciones discordes cuando no contradictorias desparrramadas en una legislación desarticulada: jueces locales y jueces federales de la Capital Federal; jueces federales en provincias y jueces letrados de los territorios federales; b) Estatuto del magistrado, consagrando una solución de justicia y a igual jerarquía de los jueces nacionales de la República igual retribución; c) Estatuto y escalafón para todos los empleados judiciales que han sido librados hasta hoy a la buena o mala voluntad de cada tribunal; d) Redistribución del trabajo de la justicia de la Capital Federal de acuerdo a los principios de especialidad y con unidad jurisdiccional; e) Legislación sobre organismos auxiliares técnicos; f) Atribución al Poder Ejecutivo de la Nación del gobierno de organismos correlativos a la justicia, pero de funciones administrativas como el Registro Público de Comercio, el Archivo y el Boletín Judicial.»

De la simple mención de los asuntos contenidos en el proyecto de ley de organización de la justicia nacional, que el Senado considera, surgen su extraordinaria importancia y la conveniencia de sancionarlo, dándole a la Nación una gran ley, de tantos años reclamada por la magistratura, la cátedra universitaria y la opinión nacional.

Esta vez, como nunca se hizo, señor presidente, la reorganización del Poder Judicial de la Nación será realizada en la forma total e integral que la voluntad nacional nos impusiera en comicios libres conforme con el plan de gobierno del excelentísimo señor presidente de la Nación, general Perón.

El artículo 85 del proyecto de ley, tal como lo sancionó la Cámara de Diputados, dispone que por esta vez y dentro de los noventa días y por vía de superintendencia, la Corte Suprema de Justicia reorganizará a todo el personal de la justicia de la Nación.

El Senado que prestó su acuerdo para la designación de los señores jueces del alto tribunal federal, conoce perfectamente bien la idoneidad

moral, la capacidad intelectual, el patriotismo y el conceptuoso desempeño justicialista de todos ellos, tanto como la tradición republicana y la hombría de bien que los distingue. Por esas razones, que la opinión nacional también aprecia debidamente, tengo la seguridad absoluta de que la reorganización del personal de la justicia de la República está en muy buenas manos y la más limpia equidad presidirá sus tareas en esta parte de la nueva ley.

Esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, señor presidente, constituida por los doctores Longhi, Valenzuela, Casares, Pérez y Pessagno, es la nueva corte que el pueblo argentino quería. Existe entre ella y la otra corte la «radiante claridad» que Yrigoyen dijo que debía existir en el manifiesto de la revolución que se cumplió recién a los cuarenta y cinco años de haberse firmado, en 1905. Es la corte justicialista.

Fué a la otra corte a quien dijo Yrigoyen, desde su prisión de Martín García, las siguientes palabras de protesta que quedaron sin respuesta: «No me cierre vuestra honorabilidad sus estrados, como lo ha hecho hasta hoy, y déme todas las justas amplitudes para esclarecer en todas sus lucideces la cuestión suscitada, tan intencionada como malévola, contra el gobierno que he ejercido. Y hágase cargo vuestra honorabilidad de las cuestiones que le he planteado, rebatiéndolas como le parezca, pero no eludiéndolas como lo ha hecho hasta hoy. Y permítame vuestra honorabilidad el más primordial derecho de defensa, que en este caso es la investigación documentativa de toda la administración del gobierno que he desempeñado, sobre los puntos que han servido de pretexto para mantener al «procesado», durante dos años hasta ahora, en un encierro, el más indigno y vituperable en que haya sido colocado un ciudadano que jamás tuvo nada que ver ni que hacer con las demandas de la justicia y que no ha tenido los cargos públicos como refugio o recurso propio para nada ni para nadie, sino que fué al gobierno a llenar un cometido histórico, a consolidar la obra legendaria realizada por la Nación, a culminar uno de sus más nobles y grandiosos gestos con la visión genial de sus destinos. Y termino, contestando a las irreverencias de vuestra honorabilidad, sean cuales fueren los eventos de vuestras definitivas soluciones: que la Nación hasta hoy —1932— no tuvo jamás un hijo más patriota que yo ni más augusto en las idealidades de ese concepto de esclarecimiento nacional.»

**Sr. Bavio.** — Si me permite el señor senador una breve interrupción, voy a hacer un recuerdo que le va a resultar agradable. En una banca de este recinto se sienta el defensor del doctor Yrigoyen.

**Sr. Madariaga.** — Voy a decirlo en seguida, señor senador.



«Refugio» o «recurso propio» llamó el prisionero de Martín García a la Corte del régimen depuesto por la gloriosa revolución de Junio, bajo el signo de Perón. El Senado de la Nación Argentina, organizado por la voluntad nacional, puso término a su desempeño por el voto de los señores senadores aquí presentes. ¡Qué honroso recuerdo para los hijos y los nietos van a llevar los señores senadores!

Con esta ley de organización de la Justicia Federal se completará la gran obra revolucionaria dentro del Poder Judicial de la Constitución de Perón. Todos nosotros tenemos, señor presidente, la emoción y el orgullo cívicos de sabernos peronistas a secas, como hace ya muchos años fuimos amigos de Yrigoyen. Por eso lo recordamos hoy, en esta jornada histórica del Senado de la Nación, como los antiguos caballeros de las cruzadas del cristianismo recordaban a sus difuntos camaradas, como presentes, en los días memorables, en los altos de las marchas, en el ondear de los estandartes simbólicos o en las oraciones silenciosas de los atardeceres lejanos sobre las rutas milenarias de Tierra Santa. (*¡Muy bien!*)

El abogado defensor de Yrigoyen ante la Corte Suprema de aquellos días, así como su colaborador en la defensa, están presentes también en esta sanción del Congreso: aquí el señor senador por el Estado de Santa Fe, doctor Antille, y en la otra Cámara el diputado por la Capital Federal, doctor Benítez, brillante orador en la sanción de esta gran ley.

El pueblo argentino, es decir, la voluntad nacional, había dispuesto que la revolución llegara una vez más a la manzana del viejo Parque de Artillería, donde se levanta el edificio del Poder Judicial de la Nación.

Y esta ley revolucionaria es como un eco lejano, pero siempre marcial, de los viejos clarines del 90, que no se apagó jamás en el alma de las multitudes porteñas.

Parafraseando un párrafo del Manifiesto del 90, puedo terminar diciendo, con verdad y armonía, señor presidente: «El único autor de esta ley revolucionaria, profundamente nacional, larga e impacientemente esperada, es el pueblo argentino, conducido por Perón, que, fiel a la tradición de Mayo, reproduce en la Historia una nueva evolución regeneradora que esperaban anhelosas todas las provincias argentinas que nosotros representamos.» (*¡Muy bien!*)

**Sr. Antille.** — Pido la palabra.

Señor presidente: el miembro informante de la comisión que ha tenido a estudio este proyecto de ley, ha sido preciso y completo, en la información que debe recibir el Senado para votar a conciencia el proyecto que está a discusión. No ha dejado un punto que tocar; ha expresado los puntos fundamentales y constitucionales en que se basa este proyecto y se ha referido

concretamente a los aspectos generales de la ley, tocando también en particular cada uno de los artículos que la componen, explicando el alcance y razón de ser de los mismos.

Por mi parte, poco tengo que agregar, como no sea que estoy de acuerdo en absoluto con las manifestaciones vertidas por el señor senador por Entre Ríos, y que, a lo que él ha dicho, solamente podría agregar que este proyecto quizá hubiera sido totalmente completo, si hubiera contenido algunas otras prescripciones que se hacen necesarias, pero que en el mismo se dejan para más adelante, cuando se hayan de presentar los nuevos proyectos con las disposiciones legales que correspondan.

Por ejemplo, no habla este proyecto de la casación, que debe ponerse en vigencia por mandato de la Constitución justicialista de 1949.

No se habla de la formación orgánica del ministerio público, que se compone de todos los funcionarios fiscales, que representan al Poder Ejecutivo en la acción judicial.

Estas disposiciones —así se ha anunciado— han de ser satisfechas cuando aprobemos en el Congreso las nuevas leyes que traten estos aspectos.

En cuanto a la ley misma, debemos recordar que este Honorable Senado, ha dado ya su opinión cuando le tocó despachar el proyecto que presentara el ex senador por Catamarca, doctor Julio Herrera, como se ha recordado por los señores senadores.

El 20 de agosto de 1948 el Senado discutió el alcance de todas las prescripciones contenidas en el proyecto que este señor senador presentara. El doctor Herrera, cuya versación jurídica es perfectamente conocida, expresó las razones por las cuales era indispensable la modificación de la organización de la justicia en la Capital y en los estados sometidos a las leyes federales.

Decía que era oportuna la sanción de aquel proyecto, que todos los principios fundamentales del mismo se podían sintetizar en estos conceptos: quería que se unificaran los fueros de la justicia de la Capital; él deseaba que se equipararan las categorías judiciales, destacando las virtudes y los efectos saludables de la federalización de la justicia, que hubiera nueva constitucionalidad, una nueva estructuración de la corte con sus consecuencias y con sus efectos. También se refería a la superintendencia y a la casación como consecuencia de su proyecto de dar intervención a la corte para resolver por esta vía las sentencias y fallos necesarios para unificar y dar un criterio único a la orientación de las leyes donde se aplicaran principios constitucionales y leyes civiles o penales. Deseaba además, que en la organización del ministerio público, con su independencia, su jerarquía y su dignidad, se tuviera en cuenta el rol que le tocaba desempeñar. Estas razones que él expresa sintéticamente se fundaban en el cono-

cimiento que tenía por estudio personal de las distintas monografías, publicadas por la opinión de la «Jurisprudencia Argentina», de la «Gaceta del Foro» y de «La Ley», que como se sabe son expresiones jurídicas y técnicas respecto al procedimiento y a la aplicación de las leyes por los jueces. Tenemos, como ha dicho muy bien el señor senador por Corrientes, un conocimiento total de este asunto; no improvisamos ya en el año 1948, y menos vamos a improvisar en esta oportunidad. Si no fuera suficiente el conocimiento que ya tenemos los senadores, debemos agregar que él ha sido estudiado extensamente en la Cámara de Diputados al sancionarse el proyecto que está a nuestra consideración. El miembro informante del mismo, diputado Benítez, se ha expresado con un conocimiento cabal de la organización de nuestra justicia en la Capital. Desde el punto de vista histórico expresó cómo se llegó a sancionar dos leyes de organización, como una transacción, como un compromiso entre los habitantes de la Capital que estaban sometidos a leyes y a los jueces de carácter provincial antes de la incorporación del Estado de Buenos Aires a la Federación, y cómo hubo de darse una especie de legislación transaccional, diríamos, para mantener esta situación. Posteriormente se dictó la ley de nacionalización de la justicia con el aspecto ya completamente federal, y por eso han existido dos clases de jueces y dos clases de leyes procesales referentes a esta materia, lo que ha de desaparecer totalmente con la sanción de este proyecto que estamos tratando.

Era evidente que dando y buscando razones para sostener esta distinta legislación, para organizar la justicia de la Capital, se acudiera a teorías y doctrinas, a la jurisprudencia de Norteamérica, sobre la cual se basan en general todos los proyectos que referentes a la justicia se sostienen actualmente, y en aquella época con más razón.

En 1880, cuando se incorpora la ciudad de Buenos Aires como Capital a la Federación Argentina, cuando el Estado de Buenos Aires se hace un Estado de la Federación, era necesario mantener por algún tiempo esas autoridades judiciales, esa clase de justicia, hasta entonces provincial, que pasó a ser justicia nacional.

Desde entonces ha habido para la aplicación de la justicia y de las resoluciones de los jueces dos procedimientos distintos también, que debemos anotar en este momento. Tenemos la ley 50, que es de la justicia federal, y tenemos el Código de Procedimientos Civiles para la Capital Federal y territorios nacionales, que aunque es supletorio de la ley 50, sin embargo es distinto y se aplica de modo diverso.

En la sanción de este proyecto de ley no debemos olvidar que es indispensable que luego venga una ley que unifique el procedimiento, que

no mantenga separado el trámite de los jueces, porque habrá una sola justicia, unida y con carácter de justicia federal; pero habrá otro procedimiento que en algunos casos podrá ser invocado por las partes y alguien tendrá que decir cuál es el que se debe aceptar: o será la ley que el Congreso dicte oportunamente al respecto, o lo que establezca la Corte Suprema de Justicia en su función de superintendencia sobre los casos en conflicto.

Yo digo, señor presidente, que este proyecto que tratamos va a surgir sin una completa y absoluta formación en el aspecto mismo de la materia porque no establece nada respecto al recurso de casación; no obstante estar obligado el Congreso a sancionar el procedimiento porque la Constitución lo impone así, no se dice ni una palabra respecto al trámite a seguir en estos casos.

Naturalmente que se anticipa que ha de dictarse en su oportunidad una ley procesal para hacer funcionar el recurso de casación, pero no es suficiente anticiparlo aquí; podría establecerse ya, por lo menos, que los miembros de la corte han de aumentarse cuando entre a regir la ley procesal sobre casación y revisión. Es sabido que el número de cinco miembros para la Corte que aquí se sanciona no es suficiente para entender en todos los casos que han de llegar a su conocimiento por el recurso de casación. Tendríamos que establecer ya que el número de miembros de la corte aumentará cuando sea indispensable hacerlo para aplicar ese recurso, cuando se haya establecido este procedimiento por una ley.

Creo, señor presidente, que no obstante estas deficiencias que apunto por amor a la verdad, debemos apoyar el informe y el pedido de sanción que ha formulado el presidente de la Comisión de Justicia, y que fuera de estos casos no tenemos muchas cosas que observar.

No deseo terminar sin anotar que también tendrán que reformarse por una ley algunos aspectos como, por ejemplo, el artículo 73, que entrega la elección de los rematadores a la voluntad de los jueces, sorteándolos de una lista confeccionada por el Poder Ejecutivo. No me parece objetable que sea el Poder Ejecutivo quien formule esa lista, pero sí me parece raro que sea obligatorio para los jueces tomar de esa lista a los rematadores, cuando en verdad las partes pueden ponerse de acuerdo y elegir por propia voluntad a un rematador que puede o no estar en la lista, porque en esa forma se someten todos a lo que debe privar en la solución de las causas judiciales: a la voluntad de las partes. Si demandante y demandado se ponen de acuerdo para elegir un perito, un rematador, que es también un funcionario auxiliar de la justicia, no creo que la ley pueda impedirlo sin inferir un poco de injusticia. Como la Constitución de 1949 tiene por base, precisamente, la defensa de

lo que sea justicialismo, yo creo que este artículo debe modificarse, haciendo una aclaración que diga: «Salvo el caso de que las partes se pongan de acuerdo en la elección de rematadores.»

No tengo otra cosa importante que decir, lo que significa que para mí toda la ley es aceptable.

Por eso, señor presidente, voy a votar por la aprobación del proyecto.

**Sr. Bavio.** — Pido la palabra.

Pensaba hacer uso de la palabra, señor presidente, en la discusión en particular; pero dado lo avanzado de la hora me voy a limitar a pronunciar unas pocas para fundamentar mi voto a favor de este proyecto, al que considero de importancia trascendental, como lo han destacado muy bien el señor miembro informante de la comisión, el señor senador por Corrientes y el señor senador Antille, con su autoridad reconocida en la materia.

La circunstancia de haber asistido a las sesiones de la Comisión de Legislación por gentileza de su presidente, que invitó a los letrados que sin ser miembros de ella formamos parte del Senado a asistir a sus deliberaciones, me ha permitido seguir paso a paso el detenido estudio que la comisión del cuerpo ha hecho con respecto a este proyecto de ley. Se han analizado todos los antecedentes, que, por cierto, en este Senado son abundantes en los últimos tiempos, ya que, con motivo del proyecto del ex senador Herrera, en su oportunidad debimos abocarnos al estudio de una ley tendiente a lograr la verdadera organización de la justicia federal. Ello nos está revelando cómo el Senado de la revolución, según se ha dicho en alguna oportunidad, desde sus primeros instantes se preocupó por un problema de tanta importancia y trascendencia.

No voy a entrar, señor presidente, al análisis del proyecto, en obsequio a la brevedad y al conocimiento que los señores senadores tienen de él, por lo que ya se ha dicho, por el estudio de la comisión y por lo que se ha tratado y discutido en el bloque único de senadores, donde acostumbramos dilucidar todos los problemas que luego se traen a este recinto; pero sí quiero decir algo con respecto al artículo 14, que dice que «la Corte Suprema de Justicia nombra, remueve y decide sobre toda cuestión vinculada al personal de la justicia de la Nación cuya designación no dependa del Poder Ejecutivo, conforme a las normas de esta ley y a las que aquélla establezca en sus reglamentos». Como lo he escuchado en la comisión, no me cabe la menor duda de que la Corte Suprema de Justicia, con un alto concepto de la dignidad de los magistrados de las cámaras y juzgados federales, ha de reglamentar esta importante materia en el sentido de que estos magistrados federales de provincia y esas cámaras federales propongan a la corte la designación de su personal.

Es evidente, señor presidente, que no puede la Corte Suprema estar en los detalles de las designaciones en provincias y cámaras federales de tales o cuales funcionarios para delicadas tareas como las de secretario, por ejemplo. Yo me pongo en el caso de ser juez federal o miembro de una cámara federal y que no pudiera proponer secretario ni prosecretario, funcionario que deben gozar de la confianza de los proponentes para el desempeño de la misma y para la conducción administrativa y técnica judicial de la magistratura.

**Sr. Antille.** — ¿Me permite, señor senador? Ni recomendar un ascenso.

**Sr. Bavio.** — Así es, señor senador, ni recomendar un ascenso.

Tengo la firme convicción de que la Corte Suprema de Justicia ha de proceder así, y con esa inteligencia voy a votar afirmativamente este artículo 14 en su oportunidad, convencido de que en la reglamentación pertinente se han de fijar normas tendientes a que los jueces nacionales, como se los llama ahora en la nueva ley, y las cámaras federales podrán proponer la designación de sus empleados, comenzando por los secretarios y, como muy bien lo ha dicho el señor senador por Santa Fe, también proponer los ascensos.

En tal sentido yo desearía conocer, para que quede bien definido el concepto en esta oportunidad, el pensamiento del señor presidente de la Comisión de Justicia.

**Sr. Basaldúa.** — Entiendo que la corte reglamentará esas funciones.

**Sr. Bavio.** — Muy bien, no quería decir nada más.

**Sr. Ramella.** — Creo que podrá delegar la corte la facultad de proponer en las cámaras o en los jueces, pero nunca la facultad de nombrar.

**Sr. Bavio.** — Yo entiendo así también, señor presidente.

**Sr. Basaldúa.** — Por la misma jerarquía de la magistratura, la Corte Suprema tendrá siempre que delegar ante las cámaras o juzgados la facultad de proponer su personal.

**Sr. Ramella.** — Si me permite, diré que estoy de acuerdo, en substancia, con lo expresado por el señor senador por Salta. La realidad es que cuando un juez se hace cargo del juzgado, con personal completo, tiene que actuar, podemos decir, con personal ajeno a su confianza. Todo dependerá de la prudencia, del tacto, del tino del juez para que esos funcionarios que no conoce actúen de acuerdo con las normas legales y éticas que corresponden. No creo que, en ese sentido, sea un obstáculo insuperable. Más favorable me parece el argumento que esgrime el señor senador por Salta, en el sentido de que no

es posible que funcionarios que actúan en la Capital Federal puedan conocer exactamente a las personas de las provincias, o de los territorios, según el caso. Y, en ese sentido, sería una norma de prudencia que los nombramientos se hicieran, sí, a propuesta de los jueces o de las cámaras respectivas.

**Sr. Bavio.** — Pido la palabra.

Celebro haber coincidido con el señor presidente de la comisión y con el señor senador por San Juan. Con esta aclaración creo que podemos votar con toda tranquilidad, convencidos de que nuestra Corte Suprema ha de proceder con el mayor tino y equidad en esta materia.

**Sr. Madariaga.** — Pido la palabra.

El artículo 94 de la Constitución dice: «La Corte Suprema de Justicia dictará su reglamento interno y económico y nombrará sus empleados. Ejercerá superintendencia sobre los jueces y tribunales que integran la justicia de la Nación.

«En la Capital de la República todos los tribunales tienen el mismo carácter nacional.» También coincido con las manifestaciones del señor senador por el Estado de Salta, y creo que la Corte, a quien me he referido en las palabras que dije anteriormente, ampliará con equidad y justicia esta amplísima facultad que se le da por el artículo 14, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución de la Nación.

**Sr. Presidente** (Teisaire). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Teisaire). — En consideración en particular.

—Sin observación, se votan y aprueban los artículos 1º al 4º.

**Sr. Mendiando.** — Pido la palabra.

Hago moción para que se enuncien los artículos y aquellos que no sean observados, se den por aprobados.

**Sr. Ramella.** — Me voy a permitir disentir con el criterio del señor senador por Corrientes, porque es una ley sumamente importante, y como se le introducen algunas modificaciones, sería conveniente su lectura.

**Sr. Mendiando.** — Salvo los artículos que no sean observados.

**Sr. Scatamacchia.** — Apoyo la moción formulada por el señor senador por Corrientes.

**Sr. Presidente** (Teisaire). — Se va a votar la moción del señor senador por Corrientes.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se aprueban los artículos 5º a 16.

—Se enuncia el artículo 17.

**Sr. Ramella.** — En el texto que tengo sobre mi banca, se dice: «las faltas de los funcionarios, empleados y demás auxiliares de la justicia de la Nación, podrán ser sancionados...». Debe decir «sancionadas».

**Sr. Basaldúa.** — Se trata de un error, señor senador.

—Se aprueba el artículo 17.

—Se aprueban los artículos 18 a 20.

—Se enuncia el artículo 21.

**Sr. Bavio.** — Pido la palabra.

Como una acotación a este artículo, deseo recordar, señor presidente, para que quede como una expresión de anhelos, que en alguna oportunidad se habló de la posibilidad de aumentar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Con mucha razón, el señor senador Antille, destacó que si se ha de cumplir con la disposición constitucional referente a la creación de la casación, desde luego, que no van a ser suficientes los cinco jueces de la Corte Suprema para atender los numerosos asuntos que tendrían que considerar, si se estableciera ese recurso entre nosotros.

Por lo tanto, señor presidente, entiendo que debiéramos ir pensando que los jueces de la Corte Suprema fueran catorce, en el concepto de que cada uno de los Estados argentinos tuviera un representante en ese alto tribunal de justicia. Eso sería lo ideal.

**Sr. Ramella.** — Serían quince, señor senador.

**Sr. Bavio.** — Uno por la Capital Federal. Estos quince jueces de la Corte Suprema serían un exponente de los distintos Estados federales.

La Corte Suprema de Justicia constituiría, así, la expresión de las provincias argentinas y de su distrito federal y estaría en condiciones de implantar y atender todo lo atinente a la casación, que algún día tendrá que llegar.

**Sr. Ramella.** — Pido la palabra.

Me complace sobremedura escuchar lo que ha expresado el señor senador por Salta, porque en una obra que escribí sobre estructuración de la reforma constitucional, casualmente hablaba de establecer la casación y enunciaba el mismo concepto del señor senador, en el sentido de que era necesario que este tribunal estuviera compuesto por un representante de cada provincia, y yo agregaba, de los territorios nacionales, que también forman parte integrante de nuestro territorio nacional, lo que muchas veces se olvi-

da. Porque los problemas del país deben ser contemplados y resueltos por todo el país, pues lo peor que le puede ocurrir a una justicia es que pierda ese carácter nacional en el sentido de contemplar todas las particularidades regionales, que se conocen indiscutiblemente por quienes han vivido en los respectivos lugares.

Yo he tenido el honor de ser juez de mi provincia y he comprobado cosas realmente extraordinarias; que la Corte Suprema de la Nación de aquel entonces, no sólo subestimaba a los jueces de provincia con un criterio equivocado de creer que en provincias los jueces saben menos que los de la Capital Federal, sino que resolvía a veces sobre juicios de expropiación adjudicando valores a las tierras que no lo tenían, porque los que conocemos nuestras respectivas provincias sabemos, por ejemplo, que en la provincia de San Juan, donde no hay agua, la tierra no puede tener valor, y, sin embargo, conozco juicios determinados, en los cuales la Corte Suprema de la Nación adjudicaba valores exorbitantes por expropiación de tierras que no tenían realmente ningún valor. Y eso se debía al desconocimiento indiscutible del medio al cual se refería el juicio.

Nada más.

**Sr. Antille.** — Pido la palabra.

No sé, señor presidente, si la comisión nos acompañará en la reforma que se anticipa por parte de los señores senadores que han usado de la palabra.

En cuanto a mí, que ya he dicho antes que era indispensable aumentar el número de jueces, no creo que sería conveniente en este momento, sin haberse estudiado en la comisión y tener la opinión de ella, fijar un número determinado de jueces. Pero creo que si hubiera una modificación, podría ser la siguiente: que la corte se compondrá de cinco jueces, más los que las leyes fijen de acuerdo con las necesidades que imponga el recurso de casación. Con esto ya dejaríamos sentado el principio del aumento de los jueces, pero para cuando venga la ley, que ha de venir, porque hay una disposición constitucional que cumplir, y entonces recién, previos los estudios del caso y previa la opinión también del Poder Ejecutivo, se establecería el número de los miembros de la corte.

Si ha de introducirse alguna modificación a este artículo, yo indicaría que no se determine el número de jueces; que se aumenten cuando la ley que ha de regir la casación lo establezca.

**Sr. Bavio.** — ¿Me permite, señor senador, con la venia de la Presidencia?

Yo no he hecho moción concreta en el sentido de modificar el artículo y por eso dije que dejaba mis palabras como expresión de anhelos para cuando llegue el momento a que se ha referido el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Ramella.** — Yo también me refería, señor presidente, al caso de que la corte actuara como tribunal de casación, que no es éste, porque esta ley no organiza todavía la casación.

**Sr. Presidente** (Teisaire). — Queda aprobado el artículo 21.

—Se aprueban los artículos 22 al 47.

**Sr. Antille.** — Pido la palabra.

Antes de continuar votando, desearía conocer del señor presidente de la comisión su opinión respecto de los elementos de interpretación que debe darse a los jueces que entenderán en materia penal especial y en materia comercial especial, a que se alude en los artículos anteriormente ya votados. Es necesario que quede una constancia expresa del pensamiento de la comisión. Como es sabido, ésta es una legislación nueva, una reforma novedosa, en cuanto a la aplicación que deben hacer los jueces de las leyes.

Entiendo que la ley penal es una para todos los jueces y no hay una ley penal especial, salvo la que no está agregada al Código Penal. El Código Penal es una ley general.

Desearía conocer, como digo, la opinión de la comisión para la aplicación que han de hacer los jueces respecto al alcance del modismo introducido de «ley penal especial». Perdoneme el señor presidente de la comisión, pero es para ayudar a la interpretación de los jueces, nada más.

**Sr. Basaldúa.** — Pido la palabra.

Está determinado precisamente en la misma ley, en el artículo 43, cuáles son los jueces que deben actuar en esas condiciones. En realidad no hay más que una modificación de nombre. Los juicios y los asuntos que actualmente substatian los jueces federales, van a concluir en la misma forma que ahora.

**Sr. Antille.** — ¿Y la materia penal especial es una materia distinta de la corriente y conocida?

**Sr. Basaldúa.** — Le contestaré al señor senador.

Por el artículo 43, los actuales juzgados federales en lo criminal y correccional de la Capital números 1 y 2, que pasan a ser juzgados nacionales en lo penal especial, conservan su actual competencia salvo aquella que le está atribuida por razón de lugar de esta ley a otro tribunal.

**Sr. Antille.** — ¿Lo determinará entonces la reglamentación que dicte la Corte Suprema?

**Sr. Basaldúa.** — Ya está determinado en la ley.

**Sr. Ramella.** — Pido la palabra.

Comprendo perfectamente el alcance de la pregunta del señor senador. La contestación del

señor miembro informante de la comisión ha sido clara, porque estos jueces federales que lo van a seguir siendo aunque con otra denominación, entenderán en las causas por razón de la materia, como se dice, y por eso ha dado el ejemplo de un delito cometido por un empleado de la Aduana en ejercicio de sus funciones. En ese caso, competirá al juez federal penal especial. Pero no entenderá de acuerdo con la excepción del mismo artículo, como ocurre ahora, en las causas por razón de lugar. Por ejemplo, si se comete un delito dentro del Banco de la Nación o en el caso de los ferrocarriles, entenderán los jueces comunes.

**Sr. Bavio.** — Es decir, que la única competencia que habrá es en razón de la materia y no del lugar.

**Sr. Ramella.** — Así lo entiendo, señor senador.

**Sr. Antille.** — Muchas gracias, señor senador.

**Sr. Presidente (Teisaire).** — Se continuará votando.

—Se aprueban los artículos 48 al 60.

—Se enuncia el artículo 61.

**Sr. Ramella.** — Pido la palabra.

Con respecto a este artículo, me complace también el agregado que ha introducido la comisión, porque aunque no surgía claramente del texto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, podía dar pie para que en estos cuerpos técnicos, si no se obligara a residir a todos los peritos en la Capital Federal, podría crearse una relación de dependencia, y ello sería un motivo serio de perturbación de la justicia.

En efecto, y voy a hacer referencia a mi experiencia de juez, lo peor que le puede pasar a la justicia es ser lenta. Me ha ocurrido lo siguiente: cuando el juez de provincia pide un informe a la seccional del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, en esa misma provincia, la repartición respectiva pide autorización a la oficina de Buenos Aires para evacuar el informe, la cual obliga al informante a que, una vez evacuado, lo consulte con la autoridad radicada en la Capital Federal. Resultado: que para contestar ese oficio se tardan tres o cuatro meses.

**Sr. Bavio.** — Lo que el señor senador dice con respecto al Ministerio de Agricultura, sucede con todas las dependencias nacionales.

**Sr. Ramella.** — He citado el caso concreto que se me planteó a mí, siendo juez.

Como digo, ese procedimiento significa una verdadera acción perturbadora de la justicia, y el concepto de la Constitución, que dice «afianzar la justicia» implica también tener una justicia rápida y eficaz, cuya acción no debe de

ninguna manera perturbarse por los órganos administrativos.

Después de haber concurrido a las deliberaciones de la comisión, me atrevo a decir que el espíritu con que se ha introducido esta reforma es el de evitar esa relación de dependencia de los cuerpos técnicos de las provincias y territorios con respecto a la Capital Federal, por lo menos en lo que se refiere a la evacuación de los informes. En la forma propuesta, se evitará la lentitud en la justicia, que es lo que más irrita a los litigantes y profesionales que en ella actúan.

**Sr. Presidente (Teisaire).** — Se va a votar el artículo 61.

—Se vota y aprueba, así como los artículos 62 al 77.

—Al enunciarse el artículo 78, dice el

**Sr. Ramella.** — Con respecto al último párrafo agregado por la comisión, también habría que hacer una acotación en el sentido de que se establece un principio justo y verdaderamente constitucional, porque esta ley 3.575 constituía un verdadero atraso en la organización de nuestra justicia, al establecer periodos determinados para la designación de los jueces. La revolución nacional justicialista de Perón restauró, entonces, el verdadero principio de la justicia, al acordar a todos los jueces, inclusive a los de paz, la inamovilidad mientras dure su buena conducta, inamovilidad que, desde luego, no significa irresponsabilidad, porque no hay que confundir las dos cosas.

**Sr. Presidente (Teisaire).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 78 tal como ha sido despachado por la comisión.

—Se vota y aprueba, así como el artículo 79.

—Se enuncia el artículo 80.

**Sr. Ramella.** — En este artículo deseo proponer un agregado después de las palabras «justicia de paz», que diga: «y de trabajo», porque la situación en que se encuentran estos funcionarios es idéntica en la justicia de paz como en la justicia del trabajo. De modo que, abonaria, por lo tanto, una misma situación para ambos casos.

**Sr. Bavio.** — Apoyo la indicación del señor senador por San Juan.

**Sr. Basaldúa.** — La comisión acepta, señor presidente.

**Sr. Presidente (Teisaire).** — Se va a leer el artículo 80 con la modificación propuesta por el señor senador por San Juan y aceptada por la comisión.

**Sr. Secretario (Reales).** — (*Leyendo*): «Artículo 80. — Los actuales oficiales primeros de

la justicia de paz y del trabajo actuarán como prosecretarios, y reemplazarán al secretario en caso de recusación, licencia, ausencia u otro impedimento.»

**Sr. Presidente** (Teisaire). — Se va a votar el artículo 80.

—Se vota y resulta afirmativa, así como los artículos restantes.

**Sr. Presidente** (Teisaire). — Queda aprobado el despacho.

No habiendo otro asunto que tratar, queda levantada la sesión.

—Eran las 13.

CARLOS E. MALLADA.  
Director del Cuerpo de Taquígrafos.